GOBIERNO DE PUERTO RICO
SENADO

20ma Asamblea Legislativa

4ta Sesión Ordinaria

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA
MARTES, 13 DE OCTUBRE DE 2026

MEDIDA	COMISIÓN	TÍTULO
P. del S. 1403 (A-128) *(Por el señor Rivera Schatz y la Delegación del PNP)*	**VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL** *(Con enmiendas en el Decrétase y en el Título)*	Para enmendar la Ley Núm. 97 de 10 de Junio de 1972, según enmendada , conocida como "Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda"; a los fines de añadirle un nuevo Artículo 4–D; establecer el Programa de Desarrollo, Mejoras de Vivienda, Administración de Terrenos de Vivienda y Títulos de Propiedad; establecer las facultades y deberes sobre los terrenos del Departamento de la Vivienda; agilizar los procesos de usufructo, arrendamiento y otorgación de títulos; realizar enmiendas técnicas; derogar la Ley 35 de 14 de junio de 1969, según enmendada; derogar Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada; derogar la Ley ~~Núm.~~ 286 de 21 de agosto de 1999; derogar los Artículos 73-A, 73-A-1, 74, 75, 76, 76-A, 76-B, 76-C, 76-D, 77, 78 y 79 de la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941; y para otros fines relacionados.

MEDIDA	COMISIÓN	TÍTULO
R. C. del S. 155 *(Por el señor Santos Ortiz)*	**GOBIERNO** *(Con enmiendas en la Exposición de Motivos y en el Resuélvase)*	Para designar el Parque de Bombas del Municipio de Barranquitas con el nombre de Teodoro Alicea Malavé, en reconocimiento a su trayectoria de servicio, dedicación y entrega al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y a su comunidad; y para otros fines relacionados.
R. C. del S. 166 *(Por el señor González López)* *(Por petición)*	**GOBIERNO** *(Con enmiendas en la Exposición de Motivos y en el Resuélvese)*	Para designar el predio de terreno de la finca Carmen, ubicada en el barrio Bajura del término municipal de Vega Alta, donde enclava la chimenea de la antigua Central Carmen, con el nombre de Benjamín Negrón Rodríguez.
R. del S. 398 *(Por la señora Soto Tolentino)*	**TRANSPORTACIÓN, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR** *(Informe Final)*	Para ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la reconfiguración de plazas de peaje en expresos y autopistas de Puerto Rico a sistemas bidireccionales, incluyendo la metodología de cobro aplicada; determinar si las tarifas vigentes reflejan el cobro íntegro en ambas direcciones o una distribución proporcional del costo total por tramo; analizar comparativamente los recibos emitidos antes y después de dicha conversión; verificar el cumplimiento con los requisitos de rotulación y divulgación del tarifario vigente; y para otros fines relacionados.

MEDIDA	COMISIÓN	TÍTULO
R. del S. 481 *(Por la señora Barlucea Rodríguez)*	**TRANSPORTACIÓN, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR** *(Informe Final)*	Para ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico a investigar el estado de los caminos, carreteras estatales y municipales y de cualquier otra vía pública en los municipios que componen el Distrito Senatorial de Ponce, y su impacto en la calidad de vida y bienestar social de los residentes de estos municipios; y para otros fines relacionados.
R. del S. 595 *(Por el señor Toledo López)*	**ASUNTOS INTERNOS** *(Con enmiendas en la Exposición de Motivos; en el Resuélvase y en el Título)*	Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico del Senado *de Puerto Rico* a llevar a cabo una investigación ~~legislativa~~ exhaustiva sobre el estado de la administración de la justicia en Puerto Rico con el fin de recabar hallazgos y recomendaciones que propendan a la formulación de un ordenamiento jurídico más coherente, eficiente y compatible a nuestros tiempos; y para otros fines relacionados.

MEDIDA	COMISIÓN	TÍTULO
R. del S. 597 *(Por la señora Padilla Alvelo)*	**ASUNTOS INTERNOS** *(Con enmiendas en la Exposición de Motivos; En el Resuélvese y en el Título)*	Para ordenar a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales *del Senado de Puerto Rico* a realizar una investigación sobre *el estado de ejecución y* ~~en qué etapa se encuentran o cuáles han sido~~ los resultados de los contratos de gestión extendidos en ~~el~~ 2024 ~~de~~ *para* las zonas recreativas del Balneario de Punta Salinas y del Parque Nacional Isla de Cabras, suscritos entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el ~~Municipio~~ *municipio* de Toa Baja, *particularmente,* en cuanto a *su* infraestructura, *carreteras,* seguridad y vigilancia ~~de dichas zonas~~; y para otros fines relacionados.
R. del S. 602 *(Por la señora Padilla Alvelo)*	**ASUNTOS INTERNOS** *(Con enmiendas en la Exposición de Motivos; en el Resuélvese y en el Título)*	Para ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva acerca ~~del curso~~ *de la enseñanza* del proceso electoral en las escuelas públicas de nivel superior; y para otros fines relacionados.
P. de la C. 1110 *(Por la señora Medina Calderón)*	**GOBIERNO** *(Con enmiendas en la Exposición de Motivos; en el Decrétase y en el Título)*	Para declarar ~~y reconocer que~~ el primer domingo del mes de noviembre de cada año ~~será conocido~~ como el "Día de la Movilidad Asistida", con el propósito de crear conciencia y propiciar ~~el auto desempeño~~ *la autonomía* y el bienestar de las personas con ~~discapacidad y/o que presenten~~ *impedimentos y personas con* lesiones que requieran ~~utilizar la asistencia de equipos para lograr obtener~~ *el uso de equipos de asistencia para* su movilidad; y para otros fines relacionados.

MEDIDA	COMISIÓN	TÍTULO
P. de la C. 1271 *(Por el señor Morey Noble)*	**GOBIERNO** *(Sin enmiendas)*	Para derogar la Ley Núm. 80 del 1 de mayo de 1941, y otros fines relacionados.
R. C. de la C. 254 *(Por el señor Pérez Ortiz)*	**HACIENDA, PRESUPUESTO Y PROMESA** *(Sin Enmiendas)*	Para reasignar a la Oficina de Obras Públicas del Municipio de Bayamón, la cantidad setenta y cuatro mil dólares ($74,000), provenientes de la R.C. Núm. 18-2005, Sección 1, cinco mil dólares ($5,000); R.C. Núm. 108-2009, Sección 1, Apartado 13, Inciso d cuatro mil doscientos dólares ($4,200); R.C. Núm. 153-2009, Sección 1, Apartado A, mil setecientos dólares ($1,700); R.C. Núm. 233-2009, Sección 1, Apartado A, mil dólares ($1,000); R.C. Núm. 140-2010, Sección 1, cuatro mil dólares ($4,000); R.C. Núm. 145-2011, Sección 1, Apartado A, Inciso 2, mil seiscientos sesenta y cuatro dólares ($1,664); R.C. Núm. 6-2012, Sección 1, diez mil quinientos ocho dólares con ochenta centavos ($10,508.80); R.C. Núm. 161-2012, Sección 1, Apartado A, Inciso 2, mil dólares ($1,000); R.C. Núm. 187-2012, Sección 1, Apartado A, Inciso 3, dos mil dólares ($2,000); R.C. Núm. 110-2016, Sección 1, quince mil novecientos veintisiete dólares con veinte centavos ($15,927.20) R.C. Núm. 18-2017, Sección 1, Apartado 16, Incisos c y d veintisiete mil dólares ($27,000); para ser utilizados según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar el pago de los fondos reasignados; y para otros fines relacionados.

MEDIDA	COMISIÓN	TÍTULO
R. C. de la C. 326 *(Por el señor Roque Gracia)* *(Por Petición)*	**AGRICULTURA** *(Con enmiendas en la Exposición de Motivos; en el Resuélvese y en el Título)*	Para ordenar ~~al Departamento de Agricultura~~ *a la Autoridad de Tierras* y a la Junta de Planificación de Puerto Rico, a liberar de las restricciones y condiciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas, según dispuesto en la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, del predio de terreno marcado con el número Diez (10) en el Plano de Subdivisión de la finca "Vega Redonda", según consta en la Escritura Número Treinta y Tres (33), otorgada en San Juan, Puerto Rico, el 24 de junio de 1981 ante el Notario Público Rafael Pérez Fussa, sobre la Finca Número Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve (6,659) inscrita al Folio Número Doscientos Ochenta y Cuatro (284) Tomo Noventa y Tres (93) de Comerío, en el Registro de la Propiedad de Barranquitas, Inscripción Primera e inscrita a favor de Don Pedro Reyes Alicea y Doña Jesusa Ríos Ortiz, ambos fallecidos*; y para otros fines relacionados*.

ORIGINAL

RECIBIDO OCT 6'26 PM 4:49
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma. Asamblea Legislativa

4 ta. Sesión Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1403

INFORME POSITIVO

6 de octubre ~~de septiembre~~ de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, previo estudio concienzudo y consideración, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación del Proyecto del Senado 1403, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1403 tiene como objetivo enmendar la Ley Núm. 97 de 10 de Junio de 1972, según enmendada , conocida como "Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda"; a los fines de añadirle un nuevo Artículo 4-D; establecer el Programa de Desarrollo, Mejoras de Vivienda, Administración de Terrenos de Vivienda y Títulos de Propiedad; establecer las facultades y deberes sobre los terrenos del Departamento de la Vivienda; agilizar los procesos de usufructo, arrendamiento y otorgación de títulos; realizar enmiendas técnicas; derogar la Ley 35 de 14 de junio de 1969, según enmendada; derogar Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada; derogar la Ley Núm. 286 de 21 de agosto de 1999; derogar los Artículos 73-A, 73-A-1, 74, 75, 76, 76-A, 76-B, 76-C, 76-D, 77, 78 y 79 de la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

El P. del S. 1403 propone, más que crear una política pública completamente nueva, reorganizar y consolidar en la Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda un conjunto de facultades y programas que actualmente se encuentran dispersos en varias leyes de distintas épocas. La medida parte de que ese marco fragmentado contiene referencias a estructuras administrativas que ya no existen, criterios económicos desactualizados y procedimientos distintos para atender asuntos estrechamente relacionados, como la

concesión de usufructos, la venta o arrendamiento de solares y la otorgación de títulos de propiedad. Por ello, el proyecto propone añadir un nuevo Artículo 4-D a la Ley Núm. 97 de 10 de junio de 1972 y convertir esa Ley Orgánica en el estatuto rector para la administración de terrenos de vivienda y los procesos de titularidad.

El cambio estructural principal consiste en crear dentro del Departamento de la Vivienda el "Programa de Desarrollo, Mejoras de Vivienda, Administración de Terrenos de Vivienda y Títulos de Propiedad". Bajo este nuevo esquema se reúnen en una sola disposición las facultades relacionadas con terrenos adquiridos para comunidades rurales, otorgación de títulos a ocupantes y usufructuarios, venta y arrendamiento de solares, administración de terrenos gravados o afectados, manejo de predios que hayan perdido su utilidad y disposición de propiedades pertenecientes al Departamento y sus organismos adscritos. Asimismo, el proyecto impone al Secretario la responsabilidad de mantener un registro digital unificado de beneficiarios y un inventario digital actualizado de las propiedades bajo la administración del Departamento.

La medida también procura actualizar los criterios de elegibilidad. Uno de los problemas identificados en la Exposición de Motivos es que la legislación vigente conserva parámetros económicos fijos que han quedado desconectados de la realidad socioeconómica. Como ejemplo, se señala que la Ley Núm. 132-1975 mantiene un límite anual de ingresos de $21,100. En sustitución de ese modelo rígido, el proyecto define "familia de escasos recursos económicos" tomando como referencia el ingreso bruto ajustado que determine el Secretario mediante orden administrativa, con facultad para revisarlo posteriormente. Además, excluye del cómputo determinadas ayudas y beneficios, entre ellos asistencia nutricional, Seguro Social, beneficios de retiro o incapacidad y ciertas compensaciones. El razonamiento es sustituir una cifra estatutaria fija que puede tornarse obsoleta por un criterio administrativo susceptible de actualización conforme cambien las condiciones económicas y los programas de vivienda.

Otro cambio importante es la centralización de los mecanismos para regularizar la titularidad de terrenos ocupados. El proyecto dispone como criterio rector procurar resolver la titularidad a favor del poseedor u ocupante y "hacerle justicia a la familia" que desea obtener legalmente el título. Al mismo tiempo, establece condiciones para evitar que esta política se convierta en una transferencia irrestricta de patrimonio público: no podrá concederse más de un predio a una misma familia; existen restricciones sobre la enajenación y gravamen; y, para determinadas categorías, la propiedad deberá continuar utilizándose como residencia principal.

En particular, el proyecto conserva y sistematiza el mecanismo mediante el cual determinados usufructuarios pueden adquirir el solar por un precio nominal de un dólar. Para cualificar, entre otras cosas, deberán haber construido o trasladado su vivienda al predio, residir allí y solicitar formalmente el título. Sin embargo, la adquisición está acompañada de una restricción de diez años dirigida a evitar que un activo público transferido a precio nominal sea utilizado inmediatamente para fines especulativos. Si la propiedad se vende o enajena dentro de ese periodo, el beneficiario deberá reintegrar al

Departamento una proporción de su valor tasado, comenzando con un noventa por ciento durante el primer año y disminuyendo progresivamente hasta un uno por ciento en el décimo.

Esa limitación tampoco se formula de manera absoluta. La medida permite exenciones en circunstancias como divorcio, transmisión hereditaria, enfermedad grave o terminal y préstamos hipotecarios destinados exclusivamente a mejoras de la propiedad, además de otras situaciones que el Secretario considere meritorias. De esa manera, el proyecto intenta distinguir entre una enajenación de naturaleza especulativa y aquellas transferencias o gravámenes provocados por circunstancias familiares, sucesorias, médicas o de conservación de la vivienda.

También se incorpora al nuevo esquema el tratamiento de las viviendas enclavadas en terrenos ajenos. La medida faculta al Secretario para establecer por reglamento los requisitos de los solicitantes, permite retener terrenos cuando exista un interés público superior y contempla que, si ese uso público no se materializará dentro de un horizonte cercano y excede de diez años, pueda otorgarse el título a las familias que tengan allí sus viviendas. Además, establece prioridades para adjudicar solares que queden vacantes después de un rediseño de terrenos, comenzando por las familias afectadas por el propio rediseño y aquellas desplazadas por una determinación de interés público.

La propuesta atiende además el problema de propiedades abandonadas y usufructos incumplidos. Autoriza la cancelación de un usufructo cuando la parcela y sus estructuras permanezcan abandonadas durante un año o más, pero incorpora un procedimiento administrativo de notificación, oportunidad de vista, reconsideración y revisión judicial conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Así, la agilización que persigue la medida no descansa únicamente en ampliar la autoridad administrativa del Departamento, sino también en establecer un procedimiento uniforme para cancelar y recuperar terrenos que dejaron de cumplir su finalidad de vivienda.

Asimismo, el proyecto ordena que distintas instrumentalidades públicas transfieran gratuitamente al Departamento de la Vivienda aquellos terrenos públicos en los que se encuentre enclavada una vivienda. La disposición incluye expresamente a la Autoridad de Tierras, la Administración de Terrenos, DTOP, la Compañía de Fomento Industrial y la Administración de Servicios Generales, entre otras entidades. El efecto perseguido es concentrar en Vivienda la titularidad y administración de terrenos cuya utilización real es residencial, evitando que la fragmentación de la titularidad entre agencias obstaculice la regularización de las familias que los ocupan.

Otro elemento relevante es que la medida preserva una función de desarrollo comunitario más amplia que la mera transferencia de títulos. Autoriza al Departamento a suministrar materiales de construcción a costo o por debajo del costo, ofrecer asistencia técnica, invertir en edificios comunales y colaborar con otras agencias y municipios para dotar las comunidades de servicios públicos. Igualmente, contempla la adquisición de terrenos mediante negociación o expropiación para destinarlos a hogares y permite reservar

solares para comercios, instalaciones públicas, organizaciones comunitarias y otros usos complementarios de las comunidades.

Finalmente, el proyecto establece categorías que recibirán trato preferente dentro del programa, siempre que no posean propiedades, incluyendo veteranos, víctimas de violencia doméstica, personas con impedimentos, familias monoparentales y empleados públicos. A su vez, declara que los solares transferidos o pertenecientes al Departamento no estarán sujetos a prescripción adquisitiva.

La pieza completa esa reorganización al derogar la Ley Núm. 35 de 1969, la Ley Núm. 132 de 1975, la Ley Núm. 286 de 1999 y los artículos especificados de la Ley de Tierras de 1941. Por tanto, el razonamiento legislativo que articula el P. del S. 1403 puede sintetizarse como uno de consolidación, actualización y uniformidad administrativa. Es decir, no busca mantener simultáneamente varios estatutos históricos para regular distintas vertientes de una misma política, sino trasladar sus mecanismos sustantivos, con modificaciones, a la Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda y administrar desde allí de forma integrada los terrenos, usufructos, arrendamientos, títulos y programas relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para una evaluación integral de esta medida, la Comisión de Vivienda y Bienestar Social, en aras de analizar y estudiar el Proyecto del Senado 1403, solicitó memoriales explicativos a diversas agencias y entidades gubernamentales. Al momento de la preparación de este Informe, se recibieron ponencias y comentarios del Departamento de Justicia, el Departamento de la Vivienda y la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico. Con base en los memoriales explicativos recibidos y el análisis del marco jurídico aplicable, la Comisión procedió a evaluar los cambios propuestos por la medida y sus implicaciones para la administración de los programas, terrenos y procesos de titularidad bajo la jurisdicción del Departamento de la Vivienda.

AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA DE PUERTO RICO (AFV)

La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico (AFV) endosa la aprobación del Proyecto del Senado 1403. En su memorial, la AFV sostiene que "la unificación de los programas de terrenos bajo un solo organismo rector es un paso importante para transformar los servicios en unos más modernos, ágiles y accesibles para las familias vulnerables puertorriqueñas". A su juicio, la medida adelanta la eficiencia gubernamental al corregir referencias legales obsoletas al extinto Banco de la Vivienda, armonizar procesos actualmente dispersos en distintos estatutos y centralizar en el Departamento de la Vivienda la administración de terrenos y los procesos de titularidad. Destaca, además, que la facultad concedida al Secretario de la Vivienda para actualizar mediante orden administrativa los criterios de elegibilidad por ingresos permitirá evitar que límites económicos fijados por ley se tornen obsoletos, mientras que la creación de

registros e inventarios digitales facilitará la identificación y administración de terrenos destinados al desarrollo de vivienda de interés social.

La AFV enfatiza particularmente la importancia de agilizar la otorgación de títulos de propiedad, ya que "para la gran mayoría de las ayudas, programas de asistencia y subsidios de vivienda que administra y trabaja la AFV, es un requisito legal e indispensable que el participante cuente con la titularidad plena y legítima del terreno". Según explica, la falta de titularidad puede excluir a familias de incentivos para construcción, rehabilitación y asistencia económica, por lo que la transición de usufructuarios a propietarios formales contribuiría a remover uno de los principales obstáculos para el acceso a esos programas. Asimismo, avala el inciso (f)(viii) del propuesto Artículo 4-D, que dispone que las hipotecas concedidas históricamente por la AFV sobre derechos de usufructo y edificaciones se extiendan automáticamente al pleno dominio del solar una vez se produzca la transferencia de título. La Autoridad entiende que este mecanismo brinda continuidad a gravámenes existentes, protege el rango hipotecario del Estado y evita trámites notariales adicionales que podrían retrasar la regularización del título.

Como observación aclaratoria, la AFV señala que actualmente no concede nuevos préstamos garantizados únicamente mediante derechos de usufructo, debido a las exigencias regulatorias y criterios contemporáneos de manejo de riesgo hipotecario. No obstante, entiende que la disposición propuesta es necesaria para atender el inventario de financiamientos históricos aún existentes. Concluye que el P. del S. 1403 constituye "un instrumento ágil y jurídicamente viable para resolver las dificultades históricas de titularidad en Puerto Rico" y recomienda su aprobación.

DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

El Departamento de la Vivienda endosa y recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 1403. En su memorial, sostiene que la medida "constituye el resultado de un proceso de evaluación de las dificultades prácticas y legales que enfrenta la agencia al administrar un marco legal compuesto por múltiples estatutos aprobados en distintas épocas" y que uno de sus objetivos principales es corregir esa fragmentación. En particular, favorece que se consoliden bajo la Ley Orgánica del Departamento las facultades relacionadas con la administración de terrenos, usufructos, arrendamientos, venta de parcelas y otorgación de títulos, actualmente dispersas entre varias leyes antiguas y, en algunos casos, vinculadas a estructuras gubernamentales ya inexistentes.

El Departamento resalta también que la medida armoniza los procedimientos sobre terminación de usufructos y reposesión de terrenos con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, al incorporar mecanismos de notificación, vista administrativa, reconsideración y revisión judicial. Según expone, esta uniformidad resulta particularmente importante en determinaciones que afectan derechos e intereses de usufructuarios y ocupantes. Asimismo, destaca que el proyecto provee herramientas

más claras para atender situaciones de abandono, incumplimiento contractual, transferencias no autorizadas, fallecimiento de beneficiarios, cambios en la composición familiar y terrenos que hayan perdido su utilidad original por causas naturales, ambientales o de planificación.

En cuanto a los criterios de elegibilidad, Vivienda favorece que el concepto de "familia de escasos recursos económicos" pueda ser establecido y revisado por el Secretario mediante orden administrativa. Explica que los parámetros económicos fijados hace décadas pueden excluir a familias con necesidad real de vivienda y que la flexibilidad propuesta permitirá ajustar los requisitos a las condiciones económicas vigentes sin requerir una enmienda legislativa cada vez que resulte necesario actualizar una cuantía.

El Departamento destaca además dos componentes de administración patrimonial. Primero, favorece que los terrenos transferidos o pertenecientes al Departamento no puedan adquirirse mediante prescripción adquisitiva o usucapión, por entender que ello protege los activos destinados a la política pública de vivienda. Segundo, avala la creación de un registro digital unificado y de un inventario actualizado de propiedades, pues entiende que estas herramientas permitirán conocer con mayor precisión los activos bajo administración y facilitarán las decisiones sobre su conservación, utilización y disposición.

Finalmente, Vivienda enfatiza que uno de los objetivos centrales del proyecto es agilizar la solución de controversias de titularidad. Favorece que se establezca como criterio rector procurar resolver esos problemas a favor del poseedor u ocupante que cumpla con los requisitos aplicables, con el propósito de que las familias puedan obtener legalmente el título de los terrenos donde se encuentran sus hogares. En ese sentido, concluye que el P. del S. 1403 "representa una medida necesaria para fortalecer la política pública de vivienda en Puerto Rico y mejorar los servicios que se ofrecen a las familias y comunidades", por lo que recomienda su aprobación.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

El Departamento de Justicia favorece el Proyecto del Senado 1403, sujeto a que se consideren las observaciones y recomendaciones formuladas en su memorial. Justicia coincide con la intención legislativa de consolidar y modernizar en un solo marco regulatorio las disposiciones relacionadas con la cesión de usufructos, la administración y venta de terrenos y el otorgamiento de títulos de propiedad bajo la custodia del Departamento de la Vivienda. A su juicio, esa consolidación puede contribuir a un marco jurídico "más claro y accesible" y a una gestión más eficiente de la política pública de vivienda.

No obstante, el Departamento formula varias recomendaciones sustantivas. Primero, advierte que algunas disposiciones trasladadas de estatutos antiguos no han sido verdaderamente modernizadas. Señala, por ejemplo, que la facultad del Secretario para disponer de terrenos que hayan perdido su utilidad carece de criterios que definan

qué constituye esa "falta de utilidad", por lo que recomienda incorporar guías que permitan un ejercicio más uniforme, transparente y consistente de esa discreción. Asimismo, cuestiona el criterio de "hacerle justicia" al poseedor u ocupante para resolver controversias de titularidad, pues entiende que debe armonizarse con las normas sobre posesión del Código Civil y prever situaciones de poseedores concurrentes, derechos de terceros y reclamaciones previas sobre un mismo predio.

Justicia también recomienda revisar varias definiciones. En cuanto a "familia de escasos recursos", observa que la medida delega al Secretario la fijación del límite de ingresos sin establecer guías básicas para ejercer esa facultad. Respecto a "ocupante", cuestiona la justificación de utilizar el 31 de diciembre de 2002 como fecha de referencia, así como la inclusión de terrenos privados y de personas que ocupen viviendas mediante arrendamiento. De igual forma, entiende que la definición de "usufructo" debe armonizarse con el Código Civil, particularmente porque la medida lo califica como un derecho personalísimo e intransferible, mientras otras disposiciones parecen contemplar su cesión bajo determinadas circunstancias.

En cuanto a la transferencia gratuita de terrenos públicos al Departamento de la Vivienda, Justicia recomienda establecer criterios y salvaguardas que distingan los casos legítimos de viviendas enclavadas de situaciones en las que una ocupación de terrenos públicos pueda desembocar posteriormente en una transferencia gratuita y en el eventual otorgamiento de un título o usufructo. Advierte que, sin parámetros claros, la disposición podría generar incentivos no contemplados y dificultar la protección del patrimonio de otras instrumentalidades públicas.

El Departamento plantea además que la disposición sobre materiales de construcción, edificios comunales y otros servicios públicos debe aclarar la fuente de los fondos disponibles, los parámetros de colaboración económica con otras agencias y municipios y las entidades que podrían beneficiarse de esas ayudas. De manera similar, recomienda revisar el lenguaje sobre "Tierras para Hogares", particularmente la referencia a un "derecho" de las personas y familias necesitadas a contar con terreno para establecer su hogar, pues entiende que podría interpretarse como el reconocimiento de una facultad general sin que se precisen sus condiciones, criterios de elegibilidad o límites.

Justicia favorece expresamente la disposición que excluye los solares del Departamento de la prescripción adquisitiva o usucapión. Sin embargo, respecto al orden de preferencia para veteranos, víctimas de violencia doméstica, personas con impedimentos, familias monoparentales y empleados públicos, recomienda establecer criterios adicionales, ya que estas categorías recibirían preferencia independientemente de sus ingresos anuales, siempre que no posean propiedades, mientras otras disposiciones de la medida sí utilizan parámetros socioeconómicos para determinar elegibilidad.

Finalmente, Justicia formula una recomendación de técnica legislativa de mayor alcance: aunque favorece la consolidación y modernización propuesta, entiende que

podría resultar más adecuado recoger todo este régimen en una ley especial independiente, en lugar de incorporar un artículo extenso y altamente técnico a la Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda. Según explica, ello permitiría preservar la Ley Orgánica como el estatuto general de facultades y estructura de la agencia, mientras que un estatuto separado ofrecería mayor claridad, coherencia y flexibilidad para futuras enmiendas. Por esas razones, respalda el trámite ulterior y aprobación del P. del S. 1403, pero condicionado a que se revisen las disposiciones señaladas y se consideren las recomendaciones contenidas en su memorial.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Vivienda y Bienestar Social certifica que el Proyecto del Senado 1403 no impone una obligación económica en los presupuestos de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Vivienda y Bienestar Social favorece la aprobación del Proyecto del Senado 1403 con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico. Dichas enmiendas no alteran el propósito central de la medida, sino que procuran precisar varias facultades administrativas y atender las observaciones formuladas durante el trámite legislativo.

En particular, se establecieron criterios para que el Secretario de la Vivienda pueda disponer de solares gravados, afectados o que hayan perdido su utilidad, requiriendo determinaciones fundamentadas y la consideración de factores como la viabilidad del uso residencial, condiciones físicas o ambientales, planificación y derechos de terceros. También se revisaron las disposiciones sobre titularidad para aclarar que la mera ocupación de un predio no genera por sí sola derecho al título de propiedad y que, cuando existan reclamaciones concurrentes, deberán respetarse los derechos de terceros. Asimismo, se añadieron parámetros para que el Secretario actualice los criterios de ingreso de las familias de escasos recursos económicos.

De igual forma, se precisó la definición de "ocupante", limitándola a terrenos bajo la jurisdicción del Departamento o susceptibles de ser transferidos a este, y se aclaró que un contrato de arrendamiento no confiere por sí solo la condición de ocupante para fines de titularidad. En materia de usufructo, se armonizaron las disposiciones para permitir su transferencia únicamente en los casos autorizados por la Ley y con aprobación escrita del Secretario.

Además, se incorporaron salvaguardas para la transferencia gratuita de terrenos públicos, requiriendo certificaciones sobre titularidad, circunstancias de ocupación, viabilidad del uso residencial y ausencia de un uso público incompatible. También se

aclaró que la mera ocupación no obliga a transferir el terreno ni concede automáticamente derecho a título.

Finalmente, se revisaron las disposiciones sobre materiales de construcción y servicios comunitarios para sujetarlas a la disponibilidad de fondos y reglamentación, y se reformuló la sección de "Tierras para Hogares" para evitar que pudiera interpretarse como un derecho absoluto a recibir terreno, manteniendo en su lugar una política pública de acceso sujeto a requisitos, disponibilidad de terrenos y planificación.

En conjunto, las enmiendas fortalecen la claridad del proyecto, delimitan la discreción administrativa, protegen derechos de terceros y el patrimonio público, y mejoran la coherencia interna del nuevo Artículo 4-D sin apartarse de su objetivo de agilizar y modernizar los procesos de administración de terrenos y otorgación de títulos.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, presenta ante este honorable Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el **Proyecto del Senado 1403**, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,

Hon. Jamie Barlucea Rodríguez
Presidenta
Comisión de Vivienda y Bienestar Social

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea Legislativa

4ta. Sesión Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1403

20 de agosto de 2026

Presentado por los señores *Rivera Schatz, Ríos Santiago,* la señora *Jiménez Santoni,* los señores *Matías Rosario, Morales Rodríguez,* la señora *Barlucea Rodríguez,* los señores *Colón La Santa, González López,* las señoras *Padilla Alvelo, Moran Trinidad, Pérez Soto,* el señor *Reyes Berríos,* la señora *Román Rodríguez,* los señores *Rosa Ramos, Sánchez Álvarez, Santos Ortiz,* las señoras *Soto Aguilú, Soto Tolentino,* y el señor *Toledo López*

Referido a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social

LEY

Para enmendar la Ley Núm. 97 de 10 de Junio de 1972, según enmendada , conocida como "Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda"; a los fines de añadirle un nuevo Artículo 4–D; establecer el Programa de Desarrollo, Mejoras de Vivienda, Administración de Terrenos de Vivienda y Títulos de Propiedad; establecer las facultades y deberes sobre los terrenos del Departamento de la Vivienda; agilizar los procesos de usufructo, arrendamiento y otorgación de títulos; realizar enmiendas técnicas; derogar la Ley 35 de 14 de junio de 1969, según enmendada; derogar Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada; derogar la Ley ~~Núm.~~ 286 de 21 de agosto de 1999; derogar los Artículos 73-A, 73-A-1, 74, 75, 76, 76-A, 76-B, 76-C, 76-D, 77, 78 y 79 de la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La política pública de vivienda en Puerto Rico ha sido importante para fomentar la estabilidad familiar, el bienestar social y el desarrollo ordenado de nuestras comunidades. A tales efectos, existen diversas leyes dirigidas a facilitar el acceso de las familias de recursos limitados a un terreno o parcela propia. Entre estas se destacan la

Ley Núm. 35 de 14 de junio de 1969, relacionada con la venta de parcelas a usufructuarios u ocupantes; la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, conocida como la Ley de Viviendas Enclavadas en Terrenos Ajenos; y la Ley Núm. 286 de 21 de agosto de 1999, la cual atiende el traspaso o arrendamiento de solares y la concesión de títulos de propiedad. De igual modo, la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, denominada como la "Ley de Tierras de Puerto Rico", ha servido de marco para la cesión de terrenos en usufructo y la creación de comunidades.

No obstante, con el pasar del tiempo ha surgido la necesidad de revisar y reestructurar dichos estatutos para armonizarlos con el marco institucional vigente y los criterios socioeconómicos actuales. Parte de estas leyes contiene procedimientos fragmentados, estructuras administrativas inexistentes, requisitos económicos obsoletos o referencias a entidades que han sido eliminadas o fusionadas con otras agencias, como ocurrió con la antigua Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, traspasada al Departamento de la Vivienda mediante el Boletín Administrativo OE-2006-03. Asimismo, figuras como el Banco de la Vivienda ya fueron sustituidas, mediante legislación posterior, por la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico, lo que hace necesario corregir y actualizar dichas referencias.

De igual manera, el Departamento de la Vivienda atiende hoy, mediante su Secretaría Auxiliar de Gerencia y Desarrollo de Proyectos de Vivienda, más de 1,000 comunidades y alrededor de 400.000 familias, las cuales utilizan sus servicios y programas. La Ley Núm. 132-1975, por ejemplo, dispone un límite anual de ingresos de $21,100 para familias elegibles, cifra que no guarda relación con la realidad económica actual, con las guías del Departamento de Vivienda Federal (HUD) ni con la política pública del Gobierno de Puerto Rico vinculada al salario mínimo, la cual alcanza los $10.50 por hora conforme a la Ley Núm. 47-2021. Mantener límites de ingresos no actualizados provoca exclusiones injustificadas y limita el acceso de familias necesitadas a programas que, por intención legislativa, les corresponden.

De igual manera, se han identificado situaciones en las que solares originalmente reservados para fines de vivienda han perdido su utilidad por factores naturales, riesgos ambientales o incumplimiento de obligaciones por parte de beneficiarios anteriores. La falta de procedimientos uniformes para la rehabilitación de estos predios, conforme a los requerimientos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, retrasa soluciones en comunidades donde existe necesidad apremiante de vivienda y genera incertidumbre sobre la titularidad de los terrenos.

La falta de uniformidad regulatoria también afecta la capacidad del Departamento para manejar oportunamente situaciones relacionadas con abandono de propiedades o fragmentación de solares que impiden o dificultan su aprovechamiento para vivienda. Por lo anterior, resulta necesario consolidar en un solo marco legal las facultades, responsabilidades y programas relacionados con la administración de terrenos de vivienda y procesos de titularidad. La Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda, Ley Núm. 97 de 10 de junio de 1972, según enmendada, debe convertirse en el estatuto rector que agrupe y armonice todos estos esfuerzos. Para lograrlo, la presente medida crea un nuevo Artículo 4-D que establece el Programa de Desarrollo, Mejoras de Vivienda, Administración de Terrenos de Vivienda y Títulos de Propiedad, a través del cual se agilizarán los procesos, se garantizará el cumplimiento de la planificación vigente y se protegerá el patrimonio inmobiliario público.

Asimismo, corresponde derogar y sustituir las disposiciones que han sido superadas por nuestra realidad actual. Con esta Ley se deroga la Ley Núm. 35-1969, la Ley Núm. 132-1975, la Ley Núm. 286-1999 y varias secciones de la Ley Núm. 26-1941, cuyos principios y objetivos quedarán debidamente recogidos y modernizados conforme a la visión integrada del Departamento de la Vivienda. Ello permitirá un sistema más organizado, claro, ágil y accesible para las familias puertorriqueñas, al tiempo que mejorará la gestión gubernamental y reforzará la función social asociada al derecho a la vivienda.

Esta Administración reafirma su compromiso con el desarrollo urbano responsable, la protección de las comunidades vulnerables y la buena administración de los recursos públicos. La aprobación de esta Ley fortalecerá la gestión de vivienda en Puerto Rico, creará uniformidad en los procesos legales y administrativos, y asegurará que la política pública responda a las realidades de nuestra gente.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se añade un Artículo 4-D a la Ley Núm. 97 de 10 de junio de 1972, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 4-D. – Programa de Desarrollo, Mejoras de Vivienda, Administración de Terrenos de Vivienda y Títulos de Propiedad.

a. Creación del Programa, facultades y responsabilidades:

i. Por la presente se establece la responsabilidad del Departamento de la Vivienda de llevar a cabo y desarrollar los programas de desarrollo y construcción de viviendas para comunidades rurales, en cuanto a terrenos que adquirió el Departamento mediante la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada, conocida como "Ley de Tierras de Puerto Rico".

ii. Será responsabilidad del Secretario(a) tomar las medidas administrativas y programáticas para cumplir con estas disposiciones, lo cual podrá ser delegado por el propio Secretario(a) en otro funcionario del Departamento de la Vivienda.

iii. Se autoriza al Secretario(a) a conceder título de propiedad sobre los terrenos que le sean transferidos por entidades gubernamentales, sobre los terrenos

pertenecientes o que en el futuro adquieran para los fines de esta ley el Departamento de la Vivienda y sus organismos adscritos a los ocupantes o usufructuarios, que tengan ~~constituidos en éstos su vivienda~~ constituida en estos su vivienda, sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley y su reglamentación.

iv. Se autoriza al Secretario(a) a establecer, mediante ~~reglamentos especiales y transitorios~~ reglamento, procedimientos para disponer de aquellos solares o parcelas que por razón de alguna ley o reglamento se ~~encuentran~~ encuentren gravados, o afectados de tal manera que ~~impida, restrinja o evite~~ se impida, restrinja o imposibilite la disposición o uso adecuado de los mismos en favor de los beneficiarios de los programas de interés social que ~~ésta~~ el Departamento administra. El reglamento establecerá los criterios y procedimientos aplicables para determinar la procedencia de dicha disposición y deberá considerar, entre otros factores, la naturaleza y alcance del gravamen o afectación, la viabilidad del uso del terreno para fines de vivienda, las condiciones físicas y ambientales del predio, la planificación aplicable, la existencia de derechos de terceros y las alternativas razonables disponibles para conservar el terreno para los fines de esta Ley. Toda determinación deberá constar por escrito y estar debidamente fundamentada.

v. Se faculta al Secretario(a) a administrar el programa de venta de los solares a que se refiere esta ley a través de los organismos adecuados del Departamento de la Vivienda.

vi. Se autoriza al Secretario(a) a ceder en arrendamiento, mediante contrato debidamente otorgado, y discrecionalmente velando por los mejores intereses del Estado, los solares a los ocupantes que no puedan, o no deseen comprarlos, utilizando para ello el procedimiento reglamentario que se adopte a tales efectos.

vii. El Secretario(a) no podrá ceder el título de propiedad sobre terrenos públicos a más de una familia que ocupe más de una vivienda en los mismos.

viii. En el caso de los terrenos cubiertos bajo estas disposiciones, que hayan perdido su utilidad según los propósitos de esta Ley, impidiendo su utilización para los fines de esta, ya sea por causas naturales o actos de los ocupantes, el Secretario(a) de la Vivienda podrá disponer de dichos terrenos, ~~a su discreción, velando por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico~~ previa determinación escrita y fundamentada de que el terreno no resulta razonablemente apto para los propósitos de esta Ley. Para dicha determinación, el Secretario(a) considerará, entre otros factores, las condiciones físicas o ambientales del predio, la existencia de riesgos para la seguridad, las limitaciones legales o de planificación aplicables, los actos u omisiones de los ocupantes, la viabilidad de su rehabilitación y la existencia de usos públicos alternos compatibles con la política pública de vivienda. La disposición del terreno deberá realizarse conforme al procedimiento establecido por reglamento y velando por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.

ix. *Se procurará resolver el problema de titularidad a favor del poseedor u ocupante ~~de la parcela o solar. El criterio rector será hacerle justicia a la familia y conceder título a las familias que deseen obtenerlo legalmente~~ que cumpla con los requisitos de esta Ley. La mera ocupación no conferirá, por sí sola, derecho al título de propiedad. En caso de reclamaciones sobre un mismo predio, el Secretario(a) resolverá conforme a las disposiciones de esta Ley y demás leyes aplicables, sin menoscabar derechos de terceros.*

x. *~~Sera~~ Será responsabilidad del Secretario(a) establecer un registro digital unificado, que incluya la información que recopilen las oficinas regionales, la información que recopilan los diferentes programas y la información sobre los beneficiarios.*

xi. *Será responsabilidad del Secretario(a), desarrollar un inventario digital actualizado, que incluya las propiedades del Departamento y sus entidades adscritas.*

xii. *Se establece que todas propiedades objeto de esta Ley, pertenecen al Departamento de la Vivienda, y el Secretario(a) podrá realizar transferencias internas, mediante Orden Administrativa.*

b. *Definiciones:*

i. Familia – Tendrá el mismo significado dispuesto para este concepto en las normas aplicables al Programa de Vivienda Pública del Departamento de la Vivienda, e incluirá tanto personas solas elegibles bajo dicho programa como grupos familiares.

ii. Familia de escasos recursos económicos – Significa toda familia compuesta de padres e hijos cuyo ingreso bruto ajustado no exceda de la cantidad que determine el Secretario(a) de la Vivienda mediante orden administrativa. Esta suma incluirá el ingreso tanto del jefe de familia como de su cónyuge. El Secretario(a) de la Vivienda, tendrá la facultad de evaluar, y cambiar la cuantía del ingreso bruto ajustado, mediante orden administrativa, cuando lo estime necesario tomando en consideración las guías de ingresos aplicables a los programas de vivienda, la composición del núcleo familiar y las condiciones económicas prevalecientes en Puerto Rico.

No se considerarán ingresos las ayudas provenientes de becas de estudio; las compensaciones o pagos globales a veteranos; las adjudicaciones judiciales o administrativas o transacciones extrajudiciales; así como la asistencia federal recibida por concepto del Programa de Asistencia Nutricional, Seguro Social, beneficios de retiro o incapacidad.

Para el cómputo del ingreso bruto ajustado, se deducirán del ingreso bruto anual aquellos créditos que el Secretario(a) de la Vivienda establezca mediante reglamento.

iii. Familia monoparental: es aquella formada por un solo progenitor (madre o padre) y sus hijos, quienes dependen económicamente y conviven con esa figura parental, debido a circunstancias como divorcio, separación, viudez, o elección personal, adopción, entre otros.

iv. Ocupante – Es la familia que entró en posesión, en o antes del 31 de diciembre de 2002, de un solar o parte de éste, ~~ya sea en terrenos privados o pertenecientes a una agencia o instrumentalidad pública~~ perteneciente al Departamento de la Vivienda o a una agencia o instrumentalidad pública y susceptible de ser transferido al Departamento conforme a esta Ley, con o sin autorización, y cuya posesión se ha permitido por tolerancia del titular del terreno.

Se considerará igualmente ocupante aquella familia que, con posterioridad al 31 de diciembre de 2002, haya adquirido mediante transferencia, herencia, donación, permuta, cesión o compraventa, la vivienda o estructura enclavada en el solar de quien la poseía en o antes de dicha fecha.

~~También se considerará ocupante aquella familia que resida en una vivienda mediante arrendamiento, para los fines de esta~~ ley La mera residencia en una vivienda mediante contrato de arrendamiento no conferirá la condición de ocupante para fines de la concesión de un título de propiedad.

No será ocupante una familia que disfrute o se haya beneficiado de la adquisición de un solar o terreno bajo alguno de los programas del Departamento de la Vivienda o de sus organismos adscritos.

v. Precio – Cantidad determinada conforme a esta ley, la cual toma en consideración la tasación básica del solar y los ingresos devengados por su ocupante. El precio podrá fluctuar desde un dólar ($1) por solar hasta el total de la tasación básica.

vi. Tasación básica – Valoración del solar realizada por peritos, tomando en consideración el efecto que en dicho valor tiene el hecho de que el terreno se encuentre ocupado, así como las circunstancias particulares del área, forma y tamaño del solar.

vii. Terrenos, parcelas o solares – La finca donde se encuentra enclavada la vivienda, lotificada de conformidad con los términos de esta ley.

viii. Usufructo - Es un derecho real que recae sobre un bien perteneciente al Departamento de la Vivienda, mediante el cual se faculta a una persona (usufructuario) a usar y disfrutar temporalmente dicho bien, con la obligación de conservar su forma, sustancia y destino. Este derecho no confiere facultades de enajenar ni gravar el bien, ni permite modificaciones que alteren su naturaleza. Además, ~~el usufructo otorgado por el Departamento de la Vivienda se considera un derecho personalísimo e intransferible, por lo que no puede cederse ni transmitirse a terceros~~ el derecho de usufructo no podrá cederse ni transferirse a terceros, salvo en los casos expresamente autorizados por esta Ley y previa autorización escrita del Secretario(a) de la Vivienda.

ix.- Usufructuario – Persona a quien se le otorga un contrato de usufructo sobre un solar o vivienda, según lo dispuesto por esta ley.

x. Vivienda – Estructura capaz de albergar seres humanos dedicada al uso residencial de una familia.

c. Transferencia de terrenos públicos:

Se ordena a la Autoridad de Tierras, a la Administración de Terrenos, al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), a la Compañía de Fomento Industrial, a la Administración de Servicios Generales y a cualquier otra instrumentalidad pública a transferir al Departamento de la Vivienda, libre de costo, el título de propiedad de los predios de terrenos públicos en los cuales se halle enclavada una vivienda. La transferencia de los terrenos al Departamento de la Vivienda por las agencias u organismos a que se refiere será totalmente gratuita y podrá realizarse por certificación. Previo a la transferencia, la agencia o instrumentalidad titular y el Departamento de la Vivienda deberán certificar la titularidad del predio, las circunstancias de la ocupación, la viabilidad de su uso para fines de vivienda y que el terreno no esté destinado a un uso público incompatible. La mera ocupación del terreno no conferirá, por sí sola, derecho a su transferencia ni a la concesión de título de propiedad.

d. *Materiales de Construcción, Edificios Comunales y otros Servicios Públicos: El Departamento de la Vivienda podrá proveer a los usufructuarios de las comunidades establecidas bajo esta ley, de las fincas individuales establecidas bajo la Ley Núm. 26-1941, de los solares de las urbanizaciones con facilidades mínimas, y en otros lugares de la zona rural, materiales de construcción al costo o a un valor de menos del costo y bajo las condiciones de pago que señale el Departamento , así como la supervisión técnica necesaria para que dichos usufructuarios construyan sus hogares con los referidos*

materiales, sujeto a la disponibilidad de fondos y a las condiciones aplicables a la fuente de financiamiento. El Departamento podrá invertir dinero en establecer, en las comunidades que le fueron transferidas bajo la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, las fincas, las urbanizaciones con facilidades mínimas y en otros lugares de la zona rural, edificios comunales y asimismo podrá invertir dinero para proveer y cooperar con otras agencias, instrumentalidades del gobierno y municipios, para que se provea a estas comunidades o a las fincas individuales, a las urbanizaciones con facilidades mínimas o en otros lugares de la zona rural, de aquellos otros servicios públicos que el Departamento estime conveniente. El Secretario(a) establecerá mediante reglamento los criterios y condiciones aplicables a la concesión de estos beneficios y a la colaboración con otras entidades gubernamentales.

e. *Tierras para Hogares:*

Para promover el bienestar, la libertad económica y la justicia social de las personas y familias con necesidad de vivienda, ~~que tenga el derecho, por lo menos, a un cuadro de tierra donde levantar y establecer permanentemente su hogar~~ el Departamento promoverá el acceso a terrenos adecuados para levantar y establecer permanentemente sus hogares, sujeto a los requisitos de esta Ley, la disponibilidad de terrenos y recursos y la planificación aplicable.

El Departamento de la Vivienda llevará a cabo investigaciones de los sitios más adecuados que estén localizados a lo largo o cerca de las carreteras estatales o de los caminos municipales que hayan sido construidos para el

tránsito, o en sitios cercanos a núcleos de población, a segundas unidades rurales y/o centros médicos. El objeto de estas investigaciones será determinar los sitios donde puedan repartirse parcelas de no menos de un cuadro ni más de tres cuerdas de terreno a familias, según se define este término en esta ley, que deseen poseer tales parcelas para el establecimiento de sus hogares. Dichos terrenos serán adquiridos por el Departamento de Vivienda mediante procedimiento de expropiación forzosa o mediante negociación directa con sus dueños.

f. Arrendamientos y Solares para Propósitos Varios:

i. El Departamento de la Vivienda señalará vías de paso o de tránsito y separará solares para ser arrendados a comerciantes y a establecimientos industriales en los cuales puedan trabajar los beneficiarios de esta Ley o para ser cedidos al Gobierno Estatal; o al Gobierno Federal; o a los Gobiernos Municipales, para dispensarios médicos, puestos de policía, escuelas, centros de recreo, o para cualquier otro fin que el Departamento considere conveniente para los ocupantes de los predios mencionados en la sección anterior, o que sea para el beneficio social de los mismos.

ii. El Departamento de <u>la</u> Vivienda podrá separar en las comunidades que establezca, solares que ~~su cabida no podrá~~ <u>cuya cabida no sea</u> ~~ser~~ menor de trescientos cincuenta metros <u>cuadrados</u>, según las realidades de cada comunidad, para arrendarse con arreglo a términos y

condiciones que al efecto determinare, iglesias, ministros de la religión, establecimientos de cooperativas de consumo y producción, empleados públicos de cualquiera de las tres ramas de Gobierno incluyendo instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios, y a cualesquiera otras organizaciones educativas, sociales, religiosas, cívicas o caritativas, de fines no pecuniarios siempre y cuando que a ella pertenezcan y/o que con ella se beneficien los residentes de la comunidad;

iii. ~~*Disponiéndose, que en*~~ *En el caso de aquellos empleados públicos cuyo ingreso mensual no exceda lo establecido, mediante disposición administrativa por el Secretario(a) de Vivienda, y que reúnan los requisitos para ser usufructuarios, según lo establecido en esta Ley, podrá concedérseles el solar en usufructo.*

iv. El Departamento de la Vivienda no podrá dar en arrendamiento, más de un solar, ni venderles más de un solar, a cada una de las mencionadas organizaciones educativas, sociales, religiosas, cívicas o caritativas.; ~~*Disponiéndose, que en*~~ *En ningún caso se cederán o arrendarán solares en sitios diferenciados o privilegiados de tales comunidades rurales.;* ~~*Disponiéndose, además, que*~~ *Además, en los contratos de arrendamientos de dichos solares, deberá estipularse específicamente que los mismos no podrán ser subarrendados, excepto con la previa aprobación del Secretario(a) de la Vivienda, persona en que el*

Secretario(a) delegue esa función, y siempre y cuando dichos subarrendamientos sean para los mismos fines que el arrendamiento original.

v. El Departamento de la Vivienda podrá separar en las comunidades rurales que establezca esta Ley, un solar para arrendarse con arreglo a términos y condiciones que a tal efecto determine para facilidades para el uso común de organizaciones obreras. La cabida del solar no podrá ser menor de trescientos cincuenta metros, según las realidades de cada comunidad.

vi. Se faculta al Secretario(a) de la Vivienda para vender dichos solares y/o parcelas a las personas o entidades a las cuales conforme a lo dispuesto anteriormente. La determinación del precio y de las condiciones mediante las cuales se venderán los solares y/o parcelas arrendadas se hará tomando en consideración ~~los siguientes factores y cualesquiera otros factores que el Secretario(a) de la Vivienda adopte por reglamento: El uso que se le esté dando al solar y/o parcelas; El valor en el mercado del solar y/o parcela determinada a base de tasación pericial~~ el uso al cual esté destinado el solar o parcela, su valor en el mercado determinado mediante tasación pericial y cualesquiera otros factores que el Secretario(a) establezca mediante reglamento.

vii. *Todos los gastos de otorgamiento de escritura que surjan como consecuencia de las ventas de solares y/o parcelas que se autorizan en este artículo, serán por cuenta exclusiva del comprador.*

viii. *El Secretario(a) de la Vivienda no venderá más de una parcela a un mismo usufructuario u ocupante. En aquellos casos en que la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda haya concedido un préstamo garantizado con el usufructo y con la edificación que en dicha parcela se hubiese construido, la hipoteca se extenderá automáticamente al pleno dominio de la parcela en cuestión, tal como si así se hubiere otorgado originalmente.*

g. *Cesión Gratuita de Terreno en Usufructo:*

En las comunidades a establecerse, el Departamento de la Vivienda cederá en usufructo gratuitamente a las familias y personas que cualifiquen, una parcela de terreno de un área no menor de trescientos cincuenta metros cuadrados de acuerdo con la parcelación y segregación de los terrenos que el Departamento de la Vivienda haya determinado conveniente efectuar para llevar a cabo los fines de la ley.~~; Disponiéndose, sin embargo~~, No obstante, que en aquellas fincas dedicadas o a dedicarse a los propósitos de esta Ley, pero que estén localizadas adyacentes a áreas urbanas, que estén radicadas en zonas donde el alto costo del terreno y/o la densidad de la población, ~~y/o~~ o la topografía lo justifiquen, el Departamento de la Vivienda podrá, sin tener que contar con la aprobación de la Oficina de Gerencia de Permisos, establecer parcelas de un

área menor de un cuarto de cuerda, ~~y/o~~ o efectuar nuevos diseños o subdivisiones en aquellas comunidades ya establecidas en que esté presente cualquiera de los tres factores ya mencionados. A la familia o persona, que hubiere recibido una parcela en usufructo se le otorgará un contrato de usufructo que preparará al efecto el Departamento de la Vivienda, el cual tendrá fuerza de ley, y en el cual se establecerán las cláusulas y penalidades que el Departamento de la Vivienda entienda son necesarias y conveniente imponer para el caso de que se viole el contrato. El usufructuario no podrá, bajo pena de nulidad absoluta, vender, transferir, permutar, alquilar, ceder, asignar, donar, arrendar ni en modo alguno enajenar o gravar en todo o en parte, el derecho de usufructo que se le conceda, ni la parcela de terreno sobre la cual se le conceda dicho derecho, ni las edificaciones, accesiones o mejoras existentes, o que en el futuro levante o introduzca en la misma, ni ningún derecho, título o privilegio derivado del contrato de usufructo salvo que medie autorización previa y escrita del Secretario(a) de la Vivienda conforme a esta Ley.~~; Disponiéndose, que cualquier violación de esta disposición no conferirá derechos legales de clase alguna a ningún supuesto adquiriente, cesionario o acreedor, sino que, por el contrario, producirá, sin que medie declaración judicial al efecto, la confiscación a favor del Departamento de la Vivienda del derecho de usufructo concedido al usufructuario sobre la parcela, así como de todo interés, derecho y acción que sobre la parcela cedida en usufructo, o sobre las mejoras, edificaciones, accesiones o siembras existentes en la misma tuviera

~~o pudiera tener el supuesto cedente y/o cesionario, acreedor y/o deudor, vendedor o adquirente, quedando el Departamento de la Vivienda en libertad de disponer en dicha parcela, construcción, edificación, siembra o mejoras, sin tener que indemnizar o pagar cantidad de dinero a persona alguna por ningún concepto;~~ Cualquier violación a esta prohibición constituirá causa para la cancelación del usufructo conforme al procedimiento dispuesto en esta Ley y no conferirá derecho alguno sobre el terreno a quien adquiera, reciba o pretenda adquirir el derecho de usufructo sin la autorización requerida. ~~Disponiéndose, sin embargo, que el~~ El Secretario(a) de la Vivienda en el ejercicio de su discreción, podrá autorizar expresamente y por escrito a un usufructuario a transferir, ceder, permutar o asignar su derecho de usufructo a otra persona que cualifique como tal usufructuario, esta autorización deberá obtenerse previamente a realizar cualquiera de dichos negocios jurídicos; ~~Disponiéndose, además, que cualquier~~ Cualquier derecho de usufructo sobre una parcela, así como cualquier casa, mejora, plantación, siembra o edificación enclavada en la misma, que como consecuencia de una violación a las disposiciones de esta sección revierta o pase a ser propiedad del Departamento de la Vivienda, podrá ser reasignado, para los fines de esta Ley, o para cualquier otro programa que el Departamento de la Vivienda estime necesario, y cumpla con su política pública. ~~Las disposiciones de esta sección serán también aplicables a los sucesores en título de los usufructuarios originales. Disponiéndose que el~~ El derecho de usufructo aquí creado es uno de carácter

personalísimo, que no se transfiere automáticamente con la muerte del usufructuario. ~~*No obstante, lo anterior, los sucesores del usufructuario podrían tener un interés sobre las mejoras realizadas en la parcela*~~ *Los sucesores del usufructuario podrán reclamar los derechos que legalmente les correspondan sobre las mejoras realizadas en la parcela, pero no adquirirán por ese solo hecho el derecho de usufructo. El Departamento podrá adjudicar el usufructo a un sucesor que cumpla con los requisitos de esta Ley y su reglamentación. En aquellos casos en que el usufructuario de la parcela haya dejado de ocuparla total o parcialmente, y que otra persona no autorizada por el Departamento esté ocupando total o parcialmente dicha parcela, se presumirá que ha habido una cesión ilegal por parte del usufructuario de sus derechos sobre dicha parcela, con las correspondientes consecuencias a que se hace referencia en esta Ley. La familia o persona que hubiere recibido una parcela deberá trasladar su casa o construir una en la misma dentro de ciento veinte (120) días, después de haber firmado el contrato del usufructo, y, de no hacerlo, el contrato podrá ser cancelado sin necesidad de declaración judicial al efecto, y la familia o persona, deberá abandonar la parcela, dejándola a la libre disposición del Departamento de la Vivienda sin que ésta venga obligada a indemnizarles por concepto alguno.*~~; Disponiéndose, que este~~ *Este término de ciento veinte (120) días podrá ser prorrogado según se determine por reglamento.*

La cesión gratuita de terrenos en usufructo que se dispone en esta sección será extensiva en los mismos términos y condiciones a todos los empleados públicos que sean jefe de familia, que no posean terrenos en calidad de dueño, cuyos hogares se encuentren en casa y terrenos ajenos o en casa propia levantada en terreno ajeno, y que no tengan suficiente capital o cuyos ingresos, a juicio del Departamento de la Vivienda no les permita adquirir tierra. En aquellos casos en que un empleado público sin ser usufructuario se hallare poseyendo una parcela en la cual enclave su única vivienda, sin que haya mediado violencia, engaño, treta, fraude o intención de estas, para obtener dicha posesión, podrá solicitar al Departamento de la Vivienda el título de propiedad y ésta podrá concederle dicho título luego de determinar que cumple con los demás requisitos de ley y reglamento aplicables.

El Departamento de la Vivienda deberá ejercer un riguroso control en la adjudicación de estos terrenos para que los adjudicatarios llenen los requisitos de esta Ley y se cumplan con los propósitos de esta.

h. Contrato de Usufructo; Violación y Procedimiento de Vista:

El Departamento de la Vivienda otorgará un Contrato de Usufructo, a favor de aquellas personas, que cumplan con los requisitos de Ley y reglamentarios aplicables. Cuando medie una violación al contrato de usufructo, el Departamento de la Vivienda procederá a notificar por correo o mediante entrega personal al usufructuario de la intención de resolver dicho contrato. La notificación deberá expresar en qué se basa la violación o violaciones al contrato de usufructo e

informará al usufructuario de su derecho a solicitar una vista, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de la notificación, para exponer las razones por las cuales no debe cancelarse el usufructo.

Cuando un usufructuario haga la solicitud de vista, ante el Secretario(a) de la Vivienda, éste nombrará un oficial examinador quien celebrará la vista, a la cual podrá asistir el usufructuario por sí o representado por abogado. La vista administrativa se regirá por el procedimiento que mediante reglamento adopte el Secretario(a) de la Vivienda con las debidas garantías del procedimiento de ley. El usufructuario podrá solicitar la reconsideración de la determinación del Secretario(a) dentro de un término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la resolución u orden, y según las disposiciones de la Ley ~~Núm.~~ 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, o ley sucesora.

Se podrá ~~elevar~~ solicitar una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final, y según las disposiciones de la Ley ~~Núm.~~ 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.

i. Cancelación de Usufructo por Abandono de Estructuras y Proceso de Reposesión:

El Departamento de la Vivienda tendrá facultad para cancelar el contrato de usufructo de aquellas parcelas donde el usufructuario haya edificado algunas estructuras y tanto la parcela como dichas estructuras o mejoras se encuentren en estado de abandono por espacio de un (1) año o más; luego de que las gestiones hechas por los funcionarios de la agencia para localizar al usufructuario, a los efectos de que muestre causa por la cual no deba cancelarse el contrato de usufructo, hayan resultado infructuosas. El término de un (1) año deberá interpretarse de manera tal cual, que evite que los usufructuarios utilicen subterfugios, para interrumpir el término, lo anterior tomando en cuenta que el propósito de que dicha parcela sea su residencia principal. El Secretario(a) de la Vivienda, o persona en quien se delegue, autorizará en los casos, donde no se puede dar con el paradero del usufructuario u ocupante, para que bajo su firma se cite mediante edictos a dichas personas~~; Disponiéndose, que~~ ~~en~~ En un término de diez (10) días se publicarán una vez por semana dichos edictos en un periódico de circulación general en Puerto Rico;

Copia de edicto publicado le será enviada por correo a su última dirección conocida. Transcurridos diez (10) días desde la publicación del último edicto, el usufructuario tendrá que comparecer por sí o representado por abogado ante el Secretario(a) de la Vivienda o la persona en quien éste delegue para exponer las razones por las cuales no debe serle cancelado el contrato de usufructo. La determinación podrá ser apelada en un proceso administrativo ante el

Secretario(a) de la Vivienda o la persona en quien éste delegue; las determinaciones finales del Secretario(a) podrán ser objeto de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final, y según las disposiciones de la Ley ~~Núm.~~ 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. Para la celebración de la vista administrativa el Secretario(a) de la Vivienda adoptará mediante un reglamento un procedimiento con las debidas garantías del proceso de ley. De no comparecer el usufructuario se procederá a tasar las mejoras y las mismas se venderán a la persona que resulte elegible a la concesión del usufructo.~~;~~ ~~Disponiéndose, que la~~ La suma de dinero obtenida por concepto de la venta de las mejoras será depositada en un fondo de reserva creado a esos fines, suma que procederá a entregarse al dueño de la estructura cuando éste así lo solicitare dentro de un término de tres (3) años. En caso de no mediar reclamación alguna en el término antes dispuesto, dicho dinero pasará a engrosar los fondos establecidos en esta Ley.

En los casos de reposesiones de parcela, que los terrenos hayan perdido su utilidad según los propósitos de esta Ley, y que impidan utilizar las parcelas reposeídas, ya sea por causas naturales, actos del usufructuario negligentes o ilegales, el Secretario(a) de la Vivienda podrá disponer de dichos terrenos, a su discreción, velando por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.

j. Personas para cualificar:

Todo jefe de familia y aquellas personas solas que cualifiquen que residan en la zona rural, cuyo hogar se encuentre en casa y terreno ajenos o en casa propia levantada en terreno ajeno, que sea una familia de escasos recursos económicos y que no posea terreno en calidad de dueño. Para propósitos de esta Ley se utilizará el término "familia de escasos recursos económicos", establecida por el Secretario(a) de la Vivienda mediante orden administrativa a los fines de determinar el ingreso bruto ajustado.

El Secretario(a) de la Vivienda adoptará mediante orden administrativa o reglamento aquellos otros requisitos para cualificación, que entienda necesarios.

k. Limite un Solo Predio; Enajenación de o Gravamen Sobre el Predio:

No se podrá otorgar más de un predio a un jefe de familia y aquellas personas solas que cualifiquen. Estos beneficiarios no podrán traspasarlo, venderlo, transferirlo, donarlo, permutarlo, alquilarlo, cederlo, asignarlo, prestarlo, arrendarlo ni en modo alguno enajenarlo o gravarlo en todo o en parte, bajo pena de nulidad absoluta, sin antes haber obtenido previamente, el consentimiento por escrito del Secretario(a) de la Vivienda, y en cumplimiento de los reglamentos adoptados para tales fines.

l. Extensión de Beneficios:

El Departamento de la Vivienda podrá discrecionalmente extender los beneficios de este programa a personas, que, llenando los demás requisitos, residan en las zonas urbanas siempre que las mismas tengan la necesidad de vivienda, y las

comunidades sean propiedad del Departamento; y a aquellas personas residentes en la zona urbana cuyas viviendas fuesen adquiridas por el Gobierno mediante compra o expropiación para llevar a cabo algún proyecto de interés, utilidad o propósito público, y a los veteranos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, incluyendo la Guardia Costanera, ~~*independientemente de sus ingresos anuales siempre y cuando no posean propiedades y sus ingresos a juicio del Departamento de la Vivienda no le permitan*~~ *siempre que no posean propiedades y sus ingresos, conforme a los criterios establecidos por el Departamento de la Vivienda, no les permitan resolver su problema de vivienda a través de la industria privada.*

m. Título de Propiedad a Usufructuarios u Ocupantes:

i. En el caso de aquellos usufructuarios que actualmente poseen una parcela, bien sea ésta rural o urbana, y que no hayan violado lo dispuesto en esta Ley, el Secretario(a) de la Vivienda les venderá, si éstos así lo solicitan, la parcela por la suma de un dólar ($1), siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

1) Hayan construido en o trasladado su casa a dicha parcela y residan en la misma, aunque para así hacerlo se hayan excedido del término de ciento veinte (120) días.

2) Soliciten el título de propiedad al Secretario(a) de la Vivienda, en cualquier momento durante la vigencia de esta ley.

3) Paguen, como precio de compraventa, la suma de un dólar ($1) al Secretario(a) de Hacienda al momento de otorgarse la escritura.

4) Para los efectos de esta sección no se considerará que viola, el ocupante de una parcela que la usa como residencia única que, aunque para el 1ro de junio de 1968 no tuviera título de usufructo, reunía los requisitos de la ley y de reglamento para cualificar como usufructuario, o si para esa misma fecha había adquirido, por cesión o traspaso, una parcela o parte de una parcela de un usufructuario que tiene con él lazos de consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado.

5) Cualquier otro requisito que el Secretario(a) de la Vivienda adopte mediante orden administrativa o reglamento.

ii. Los adquirentes deberán utilizar la propiedad como su residencia principal. Todo usufructuario al que se le haya otorgado un título de propiedad por el precio de un dólar ($1), conforme a las disposiciones de esta Ley, y venda o en alguna forma enajene el mismo, en o antes de los diez (10) años, desde que ocurrió dicho otorgamiento, devolverá parte del valor del solar al momento de la venta al Departamento de Vivienda, a base de una tasación pericial, de acuerdo con los siguientes parámetros:

1. *Primer año noventa por ciento (90%)*
2. *Segundo año ochenta por ciento (80%)*

3. *Tercer año setenta por ciento (70%)*

4. *Cuarto año sesenta por ciento (60%)*

5. *Quinto año cincuenta por ciento (50%)*

6. *Sexto año cuarenta por ciento (40%)*

7. *Séptimo año treinta por ciento (30%)*

8. *Octavo año veinte por ciento (20%)*

9. *Noveno año diez por ciento (10%)*

10. *Décimo año un porciento (1%)*

iii. El término venta incluye otras formas de enajenación, tales como permuta, gravámenes, hipotecas, alquiler u ofrecer garantías con la propiedad como colateral. La devolución se hará al momento del otorgamiento al funcionario que comparezca a la venta en representación del Departamento de la Vivienda, quien será responsable de recibir la cantidad correspondiente en el acto. Sólo quedará exceptuado del cumplimiento de la obligación aquí dispuesta, todo aquel usufructuario que haya sido así eximido por el Secretario(a) del Departamento de la Vivienda. Esta cláusula restrictiva será incluida en toda certificación o escritura de compraventa que se expida o se suscriba al amparo de esta Ley y se extenderá a sus sucesores en derecho del adquirente. La exención otorgada por el Secretario(a) del Departamento de la Vivienda será mediante certificación escrita en la

cual se hará constar el cumplimiento con alguna de las circunstancias detalladas a continuación.

iv. El Departamento de la Vivienda eximirá a la persona o familia de pagar dicho dinero por la venta del solar o enajenación (hipoteca, garantías, alquiler, gravamen) del solar, antes del período establecido de diez (10) años, por las siguientes causales:

1. Divorcio, cuando uno de los cónyuges le ceda su participación en el solar a la otra parte que adquirirá la parte correspondiente del solar con las mismas restricciones del cónyuge cedente y tendrá el deber de cumplir con las mismas, como acuerdo en el divorcio de éstos, sin recibir participación de dinero o bienes a cambio;

2. Herencia, de adquirirse el bien por parte del dueño de la propiedad causante que deje en herencia la misma a sus dependientes o causahabientes, los cuales adquirirán el solar con las mismas restricciones del causante y se verán en la obligación de cumplir con las mismas;

3. Enfermedad grave, o terminal, según certificado por facultativo al efecto. ~~Disponiéndose que por dicha~~ Siempre que la condición del propietario o dependientes de éste que convivan en el mismo solar~~, se vea en la obligación de~~ lo obligue a disponer o enajenar el solar para obtener tratamiento médico.

4. Formalización de préstamos hipotecarios para efectuar mejoras a la propiedad, sin que quede un sobrante; y

5. Cualquier otra situación que el Secretario(a) entienda meritoria.

Toda persona que se exima por las razones expresadas anteriormente no tendrá el derecho de beneficiarse nuevamente del Programa bajo que establezca el Departamento, y para venta de Parcelas a usufructuarios u ocupantes. El dinero recobrado será utilizado para el Programa de Rehabilitación de Viviendas existente en el Departamento.

v. En el caso de aquellos usufructuarios que hayan violado lo dispuesto en esta Ley o en el Contrato de Usufructo, el Secretario(a) de la Vivienda optará por retener el título de propiedad sobre estas parcelas o por venderlas.

1. El Secretario(a) retendrá el título de propiedad en aquellos casos en que existan planes específicos por parte de las agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, para dedicar dichas parcelas a un fin o uso público tales como: carreteras, hospitales, escuelas, áreas recreativas o cualquier proyecto o facilidad gubernamental.

2. Con excepción de los casos antes mencionados, el Secretario(a) a su entera discreción podrá vender las parcelas conforme a la reglamentación que al efecto adopte. La determinación del precio y de las condiciones mediante las cuales se venderá la parcela se hará

tomando en consideración entre otros, los siguientes factores: la naturaleza, gravedad, motivación y circunstancias en que se produjo la violación al Usufructo; el uso que se le esté dando a la parcela; el tiempo que lleve el ocupante, en la parcela; la situación económica del ocupante de la parcela; el valor en el mercado de la parcela, determinado a base de tasación pericial.

En los casos en que el usufructuario u ocupante no llene los requisitos establecidos en la reglamentación que adopte el Secretario(a), o no interese comprar la parcela al precio y bajo las condiciones que éste fije, el Secretario(a) podrá vender la parcela al mejor postor.

vi. Sólo podrá concederse título de propiedad a aquellas personas que al momento de aprobar esta Ley estén en posesión u ocupen la parcela sobre la cual solicitan título de propiedad, que no sean transgresores, que no hayan obtenido la ocupación mediante treta, engaño o fraude al Gobierno de Puerto Rico, que no tengan deudas con el Gobierno de Puerto Rico.

n. Títulos de Propiedad a Viviendas Enclavadas en Terrenos Ajenos:

i. Los beneficiarios o solicitantes que interesen obtener un título de propiedad en virtud de las disposiciones de esta Ley deberán reunir los requisitos que el Secretario(a) del Departamento de la Vivienda establezca mediante orden administrativa o reglamento.

ii. La concesión de títulos que por esta Ley se autoriza se efectuará conforme a las disposiciones de esta Ley y a las condiciones, restricciones y disposiciones contenidas en el reglamento que a estos efectos adopte el Secretario(a) de la Vivienda. El Departamento solicitará documentos que estime necesarios, relacionados a la capacidad financiera o aquellos relacionados a la composición de la unidad familiar de los participantes, y cualquier otro documento imprescindible para asegurar que el participante esté debidamente cualificado y pueda alcanzar los fines del programa, deberán ser presentados.

iii. El Secretario(a) de la Vivienda retendrá el título de aquellos terrenos que éste determine, previa consulta con los organismos públicos pertinentes, que existe un interés público superior al de disponer de estos terrenos a tenor con esta ley~~; disponiéndose, que cuando~~ Cuando el comienzo de las obras no se contemple en un futuro cercano y la fecha de dicho comienzo exceda de un período de diez (10) años, el Secretario(a) podrá conceder el título de propiedad a favor de las familias que tengan constituidas sus viviendas en los solares afectados por una determinación de interés público superior.

iv. El Secretario(a) de la Vivienda podrá autorizar el traspaso del título de propiedad de aquellos solares que resulten vacantes luego

de completado el rediseño de los terrenos ocupados. En la adjudicación de dichos solares vacantes, el Secretario(a) dará preferencia a las familias o personas comprendidas en las siguientes prioridades: primera, las familias ocupantes que resulten afectadas por el proceso de rediseño de los terrenos; y segunda, las familias afectadas por una determinación de interés público superior al de disponer de los solares. Sí, una vez atendidas las prioridades antes mencionadas, aún queden solares vacantes, el Secretario(a) podrá adjudicar en usufructo los solares restantes a favor de familias de escasos recursos económicos que carezcan de un lugar adecuado para la construcción de sus viviendas.

v. Sólo podrá concederse título de propiedad a aquellas personas que al momento de aprobar esta Ley estén en posesión u ocupen la parcela sobre la cual solicitan título de propiedad, que no sean transgresores, que no hayan obtenido la ocupación mediante treta, engaño o fraude al Gobierno de Puerto Rico, que no tengan deudas con el Gobierno de Puerto Rico.

vi. En caso de una persona que anteriormente hubiese recibido un título de propiedad y por razón de algún divorcio, fallecimiento, separación, emigración, podrá concedérsele otro título si su nuevo núcleo familiar reúne los requisitos establecidos en el reglamento

de adjudicación de solares, de lo contrario, pagará por el solar el justo valor en el mercado.

o. Certificación de Título de Propiedad, contenido:

i. El título de propiedad se les concederá a los ocupantes mediante certificación, expedida por el Secretario(a) de la Vivienda, en la cual aparecerá el nombre del adquirente, el tiempo que ocupa el solar, la fecha del traspaso, la cabida y la descripción del solar, la nota de su inscripción en el Registro de la Propiedad y cualquier otro dato que el Secretario(a) de la Vivienda estime pertinente y necesario. Los adquirentes deberán utilizar la propiedad como su residencia principal.

ii. Los adquirentes de solares de conformidad con esta ley deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Ser ocupante del solar y residir en la vivienda enclavada en el mismo.

2. Tener constituido en dicha vivienda su domicilio permanente.

3. No poseer otra vivienda de ninguna índole.

4. Estar residiendo en la vivienda al momento de la aprobación de esta ley.

5. Cualquier otro requisito que establezca el Secretario(a) de la Vivienda por Orden Administrativa o Reglamento.

iii. Toda persona o familia a la que se le haya otorgado un título de propiedad por el precio de un dólar ($1), conforme a las disposiciones de esta Ley,

y venda o enajene el mismo en o antes de los diez (10) años desde que ocurrió dicho otorgamiento, devolverá parte del valor del solar, al momento de la venta, al Departamento de la Vivienda, a base de una tasación pericial, de acuerdo con los siguientes parámetros:

1. *Primer año noventa por ciento (90%)*
2. *Segundo año ochenta por ciento (80%)*
3. *Tercer año setenta por ciento (70%)*
4. *Cuarto año sesenta por ciento (60%)*
5. *Quinto año cincuenta por ciento (50%)*
6. *Sexto año cuarenta por ciento (40%)*
7. *Séptimo año treinta por ciento (30%)*
8. *Octavo año veinte por ciento (20%)*
9. *Noveno año diez por ciento (10%)*
10. *Décimo año un porciento (1%)*

iv. El término venta incluye otras formas de enajenación tales como permuta, gravámenes, alquiler, hipoteca y ofrecer garantías con la propiedad como colateral. La devolución se hará al momento del otorgamiento al funcionario que comparezca a la venta en representación del Departamento de la Vivienda, quien será responsable de recibir la cantidad correspondiente en el acto. Sólo quedará exceptuado del cumplimiento de la obligación aquí dispuesta, toda aquella persona o familia que haya sido así eximida por el Secretario(a) del

Departamento de la Vivienda. La exención otorgada por el Secretario(a) del Departamento de la Vivienda, será mediante certificación escrita, en la cual se hará constar el cumplimiento con alguna de las circunstancias detalladas a continuación. Esta cláusula restrictiva será incluida en toda certificación expedida, conforme a las disposiciones de esta Ley, y se extenderá a los sucesores en derecho del adquirente. Los Registradores de la Propiedad deberán inscribir dicha certificación o escritura de compraventa y llevar a cabo la inscripción del título a favor del adquirente, libre de derechos.

v. El Departamento de la Vivienda eximirá a la persona o familia de pagar dicho dinero por la venta del solar o enajenación (hipoteca, garantías, alquiler, gravamen) del solar, antes del período establecido de diez (10) años, por las siguientes causales:

1. *Divorcio, cuando uno de los cónyuges le ceda su participación en el solar, a la otra parte, que adquirirá la parte correspondiente del solar con las mismas restricciones del cónyuge cedente y tendrá el deber de cumplir con las mismas, como acuerdo en el divorcio de éstos, sin recibir participación de dinero o bienes a cambio;*
2. *Herencia, de adquirirse el bien por parte del dueño de la propiedad causante que deje en herencia la misma a sus dependientes o causahabientes, los cuales adquirirán el solar con las mismas*

restricciones del causante y se verán en la obligación de cumplir con las mismas;

3. *Enfermedad grave o terminal, según certificado por un facultativo al efecto.* ~~*Disponiéndose que por dicha*~~ *Siempre que la condición del propietario o dependientes de éste que convivan en el mismo solar,* ~~*se vea en la obligación de*~~ *lo obligue a disponer o enajenar el solar para obtener tratamiento médico.*
4. *Formalización de préstamos hipotecarios para efectuar mejoras a la propiedad, sin que quede un sobrante;*
5. *Cualquier otra situación que el Secretario(a) entienda meritoria.*

Toda persona que se exima por las razones expresadas anteriormente no tendrá el derecho de beneficiarse nuevamente del programa bajo de viviendas enclavadas en terrenos ajenos. El dinero recobrado será utilizado para el Programa de Rehabilitación de Viviendas existente en el Departamento.

p. Precio de venta – Fórmula

La concesión del título se efectuará por la suma de un dólar ($1) en aquellos casos en que sean familias de escasos recursos económicos según se definen en esta Ley. La concesión del título a las familias que por sus ingresos estén fuera de la definición de familias de escasos recursos económicos se hará por el precio que se determine según la fórmula que establezca el Secretario(a) mediante reglamento.

q. Solares Inservibles o Remanentes:

En caso de solares aledaños inservibles o remanentes, se le concederá prioridad al vecino inmediato. De haber más de un vecino, se recurrirá a la venta al mejor postor. En el caso de solares inservibles que no sean aledaños a otros solares, o en los que ningún vecino esté interesado, el Secretario(a) de la Vivienda, podrá disponer de estos, discrecionalmente. En toda escritura pública o certificación de título que sobre los solares inservibles se expida, se consignará que no podrán construirse en ellos estructuras dedicadas a vivienda o comercio, y que todos los gastos necesarios para tramitar la venta de estos solares inservibles serán responsabilidad del comprador. La disposición mencionada en este inciso será de entera discreción del Secretario(a) de la Vivienda, velando por los mejores intereses del Estado.

r. Los solares descritos en esta Ley, que han sido transferidos, y/o ya son propiedad del Departamento de la Vivienda, no serán objeto de prescripción adquisitiva, comúnmente conocida como usucapión

s. El Departamento de la ~~vivienda~~ Vivienda dará preferencia y tendrá facultad especial, para el Programa anteriormente creado, independientemente de sus ingresos anuales siempre y cuando no posean propiedades, para atender los siguientes casos de necesidad de vivienda:

1. *Veteranos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, incluyendo la Guardia Costanera.*
2. *Víctimas de violencia domestica*

3. *Personas con impedimentos*

4. *Familias monoparentales*

5. *Empleados públicos de cualquiera de las tres ramas de Gobierno incluyendo instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios*

Para atender estas preferencias, el Secretario de la Vivienda, adoptara la reglamentación necesaria."

Sección 2. - Se deroga la Ley 35 de 14 de junio de 1969, según enmendada; Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada.

Sección 3.- Se deroga la Ley Núm. 286 de 21 de agosto de 1999.

Sección 4.- Se derogan los Artículos 73-A, 73-A-1, 74, 75, 76, 76-A, 76-B, 76-C, 76-D, 77, 78 y 79 de la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada.

Sección 5.- Se ordena al Departamento de la Vivienda adoptar la Reglamentación necesaria para cumplir con los propósitos de esta Ley.

Sección 6.- Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte de esta Ley fuere anulada o declarada inconstitucional, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte de esta que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

Sección 7.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

ORIGINAL

RECIBIDO OCT 7'26 AM 9:27
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea Legislativa

4ta. Sesión Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 155

INFORME POSITIVO

7 de octubre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta del Senado 155 recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, con las enmiendas introducidas en el entirillado electrónico que le acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta del Senado 155 (en adelante, R. C. del S. 155), tiene como propósito designar el Parque de Bombas del Municipio de Barranquitas con el nombre de Teodoro Alicea Malavé, en reconocimiento a su trayectoria de servicio, dedicación y entrega al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y a su comunidad; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La medida propone designar el Parque de Bombas del Municipio de Barranquitas con el nombre de Teodoro Alicea Malavé, en reconocimiento a su extensa trayectoria de servicio en el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y a sus aportaciones a la comunidad.

De la Exposición de Motivos surge que el señor Alicea Malavé dedicó varias décadas al servicio público, distinguiéndose por su preparación profesional, liderazgo y compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Asimismo, su labor trascendió las funciones propias del Cuerpo de Bomberos, manteniendo una participación y reconocida dentro de su comunidad.

En ese sentido, la designación propuesta guarda una relación directa con la trayectoria del homenajeado, toda vez que identifica con su nombre una instalación vinculada precisamente al servicio público al que dedicó gran parte de su vida. De esta manera, la medida procura preservar su memoria y reconocer institucionalmente

las aportaciones realizadas al Municipio de Barranquitas y al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del R. C. del S. 155, solicitó memoriales explicativos a las siguientes agencias y entidades: Departamento de Seguridad Pública, Departamento de Transportación y Obras Públicas, Municipio de Barranquitas y el Negociado del Cuerpo de Bomberos.

A pesar de nuestras solicitudes, las siguientes entidades no comparecieron ante la Comisión: Municipio de Barranquitas y el Negociado del Cuerpo de Bomberos.

A continuación, se expone lo expresado por las entidades que comparecieron por escrito.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA

El Departamento de Seguridad Pública expresó su respaldo a la designación del Parque de Bombas del Municipio de Barranquitas con el nombre de Teodoro Alicea Malavé, en reconocimiento a su destacada trayectoria en el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, caracterizada por décadas de servicio, liderazgo operacional, compromiso con la gestión de emergencias y una activa labor comunitaria.

Asimismo, el Departamento indicó que corroboró su historial administrativo y diversas fuentes abiertas de información, obteniendo resultados favorables que reflejan una conducta intachable durante su trayectoria como servidor público y ciudadano.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

El Departamento de Transportación y Obras Públicas indicó que, por tratarse de un edificio perteneciente al Estado, no tiene injerencia sobre el asunto objeto de la medida.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107–2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión Informante certifica que la medida ante nuestra consideración no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico efectuó un análisis minucioso de la medida, según fue referida, así como de los memoriales explicativos sometidos por el Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

La Comisión de Gobierno coincide en que la designación propuesta constituye un reconocimiento meritorio a la trayectoria de Teodoro Alicea Malavé, cuyo servicio en el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y compromiso con su comunidad representan valores de entrega, responsabilidad y vocación de servicio. Asimismo, entiende que la medida permite perpetuar su legado mediante la designación de una instalación estrechamente vinculada con la labor pública que desempeñó durante gran parte de su vida.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre la Resolución Conjunta del Senado 155, recomendando su aprobación con enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno
Senado de Puerto Rico

(ENTIRILLADO ELECTRONICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma. Asamblea Legislativa

3 ra. Sesión Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 155

26 de febrero de 2026

Presentada por el señor *Santos Ortiz*

Referida a la Comisión de Gobierno

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para designar el Parque de Bombas del Municipio de Barranquitas con el nombre de Teodoro Alicea Malavé, en reconocimiento a su trayectoria de servicio, dedicación y entrega al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y a su comunidad; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Don Teodoro Alicea Malavé dedicó su vida a prepararse rigurosamente para servir y proteger a los demás. En noviembre de 1965, completó con excelencia el Curso de Mejoramiento de Conductores y el Curso Básico para Oficiales y Bomberos, demostrando su compromiso con la excelencia profesional. Ese mismo mes, ~~también~~ participó activamente en un cursillo de ~~Primeros Auxilios~~ *primeros auxilios*, ~~entendiendo~~ *consciente de* que salvar vidas requería destrezas integrales más allá del combate de incendios.

El 16 de abril de 1967, Teodoro Alicea Malavé ascendió al rango de Cabo de Bomberos en su ~~amado~~ *natal* Barranquitas, ~~un honor que reflejaba~~ *distinción que reflejó* su liderazgo y dedicación. El memorando de ascenso, fechado el 7 de abril, destacó su selección de la Certificación de Elegibles #45 para ocupar ~~este~~ *dicho* puesto de mayor responsabilidad. Veintiún años después, en 1988, completó el curso de Detección de

Fuegos Criminales de la "~~National Fire Academy~~ *National Fire Academy*", demostrando que nunca dejó de prepararse para servir mejor a su comunidad.

Su trayectoria en el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico se extendió por ~~treinta años (38)~~ *décadas* de *servicio y* entrega ininterrumpida. El 31 de enero de 1995, mediante ~~Resolución~~ *resolución* oficial, se le reconoció por su alto espíritu de sacrificio y por constituir un noble ejemplo de servidor público. Meses después, el 9 de junio de ese mismo año, el Municipio de Barranquitas y el Cuerpo de Bomberos le otorgaron un certificado por su extraordinaria labor durante más de tres décadas al servicio de su pueblo.

Su espíritu de servicio trascendió el uniforme y llegó a cada rincón de la comunidad. El 5 de marzo de 1991, la Comunidad Doña Mayo, Inc., del Barrio Quebrada Grande, le reconoció por su cooperación y orientación a los residentes. Su presencia era sinónimo de confianza y seguridad para ~~todos los que~~ *quienes* le conocían.

El 17 de septiembre de 2011, la Capilla Inmaculada Concepción Las Villas le dedicó un emotivo reconocimiento. Allí expresaron que personas como él iluminan la vida con su presencia y nos hacen sentir mejor con una sonrisa. Por todo ello, esta Asamblea Legislativa honra su memoria designando el Parque de Bombas de Barranquitas con su nombre.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.– Se denomina el Parque de Bombas del Municipio de Barranquitas, ubicado en dicho municipio, con el nombre de "Teodoro Alicea Malavé".

Sección 2.- El Departamento de Transportación y Obras Públicas *y/o el Negociado del Cuerpo de Bomberos* instalará la rotulación necesaria para la designación objeto de esta Resolución Conjunta dentro de un término no mayor de ~~los~~ noventa (90) días siguientes a su aprobación.

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea Legislativa — 4ta. Sesión Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 166

INFORME POSITIVO

7 de octubre de 2026

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR
RECIBIDO OCT 7'26 PM 1:43

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta del Senado 166 recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, con las enmiendas introducidas en el entirillado electrónico que le acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta del Senado 166 (en adelante, R. C. del S. 166), tiene como propósito designar el predio de terreno de la finca Carmen, ubicada en el barrio Bajura del término municipal de Vega Alta, donde enclava la chimenea de la antigua Central Carmen, con el nombre de Benjamín Negrón Rodríguez.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La medida propone designar el predio de terreno de la finca Carmen, ubicado en el barrio Bajura del Municipio de Vega Alta, donde enclava la chimenea de la antigua Central Carmen, con el nombre de Benjamín Negrón Rodríguez, en reconocimiento a su trayectoria en la preservación, investigación y divulgación de la historia del pueblo vegalteño.

De la Exposición de Motivos surge que Benjamín Negrón Rodríguez ha dedicado más de cinco décadas a documentar y preservar el acervo histórico y cultural de Vega Alta, mediante investigaciones, publicaciones, recopilación de documentos y fotografías, así como su participación en diversas iniciativas culturales y comunitarias. Su aportación incluye, además, el diseño de la bandera y el escudo oficial del

Municipio de Vega Alta y su designación como Historiador Oficial del municipio en 1998.

La designación propuesta guarda una relación directa con la trayectoria del homenajeado y con el valor histórico del predio donde permanece la chimenea de la antigua Central Carmen. En ese sentido, la medida procura reconocer su aportación a la conservación de la memoria histórica de Vega Alta y, a su vez, fortalecer la preservación y valoración de un espacio representativo del patrimonio cultural del municipio.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del R. C. del S. 166, solicitó memoriales explicativos a las siguientes agencias y entidades: Departamento de Agricultura, Instituto de Cultura Puertorriqueña, y Municipio de Vega Alta.

A pesar de nuestras solicitudes, las siguientes entidades no comparecieron ante la Comisión: Instituto de Cultura Puertorriqueña, y Municipio de Vega Alta.

A continuación, se expone lo expresado por las entidades que comparecieron por escrito.

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

El Departamento de Agricultura de Puerto Rico expresó su respaldo a la R. C. del S. 166, al reconocer que la designación propuesta procura preservar un espacio de valor histórico para el Municipio de Vega Alta y honrar la aportación de Benjamín Negrón Rodríguez a la investigación, documentación y divulgación de la historia local.

Asimismo, señaló que el predio objeto de la medida permanece bajo la custodia y administración de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, por lo que su identificación y manejo deben armonizarse con la política pública y las facultades legales de dicha entidad.

Finalmente, el Departamento sostuvo que la designación propuesta contribuiría a preservar el valor histórico del espacio y a reconocer el legado de Benjamín Negrón Rodríguez en beneficio del pueblo de Vega Alta.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107–2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión Informante certifica que la medida ante nuestra consideración no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico efectuó un análisis minucioso de la R. C. del S. 166, según fue referida, así como del memorial explicativo sometido por el Departamento de Agricultura de Puerto Rico.

La Comisión de Gobierno coincide en que la designación propuesta constituye un reconocimiento meritorio a la trayectoria de Benjamín Negrón Rodríguez y a su aportación a la preservación, investigación y divulgación de la historia de Vega Alta. Asimismo, entiende que la medida contribuye a fortalecer la memoria histórica y cultural del municipio mediante la vinculación de su nombre con un espacio de reconocido valor patrimonial.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre la Resolución Conjunta del Senado 166, recomendando su aprobación con enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno
Senado de Puerto Rico

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma. Asamblea Legislativa — 3ra. Sesión Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 166

19 de marzo de 2026

Presentada por el señor *González López*
(Por petición de la Alcaldesa de Vega Alta, Hon. María Vega Pagán)

Referida a la Comisión de Gobierno

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para designar el predio de terreno de la finca Carmen, ubicada en el barrio Bajura del término municipal de Vega Alta, donde enclava la chimenea de la antigua Central Carmen, con el nombre de Benjamín Negrón Rodríguez.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Municipio de Vega Alta posee un legado histórico y cultural profundamente arraigado en el desarrollo agrícola e industrial de Puerto Rico, particularmente en la industria azucarera que marcó el devenir económico y social de la región norte de la Isla. Dentro de ese contexto, la antigua Central Carmen, ubicada en el barrio Bajura, constituye uno de los símbolos más representativos de dicha etapa histórica. La chimenea que aún permanece en ese predio forma parte esencial de la memoria colectiva del pueblo vegalteño. Preservar estos espacios responde a la necesidad de fortalecer la identidad cultural de nuestras comunidades, promoviendo el conocimiento histórico y el sentido de pertenencia entre las presentes y futuras generaciones.

De igual modo, resulta meritorio reconocer a aquellas personas que han dedicado su vida a documentar, investigar y divulgar la historia de sus pueblos. Benjamín Negrón Rodríguez, nacido en Vega Alta el 25 de marzo de 1939, ha sido una de las figuras más destacadas en la preservación del acervo histórico vegalteño. Desde temprana edad desarrolló un profundo interés por la historia local, realizando investigaciones en archivos parroquiales, registros demográficos, *los archivos de* la Legislatura Municipal y el Archivo Histórico de Puerto Rico. Completó sus estudios primarios y secundarios en las escuelas públicas de Vega Alta y se graduó con altos honores de la Universidad de Puerto Rico en el año 1962.

Por más de cinco décadas, Benjamín ha contribuido significativamente a la documentación y divulgación de la historia de Vega Alta mediante publicaciones en la prensa local ~~y en el periódico Horizonte de VegaCoop~~. Su labor investigativa y su vocación de servicio le han permitido recopilar fotografías antiguas, documentos históricos y relatos que recrean la vida cotidiana del pasado vegalteño. Asimismo, ha sido cofundador de iniciativas digitales como la página "Vega Alta... Mi Vega Costera", espacio dedicado a la difusión del patrimonio histórico y cultural del municipio.

Su aportación trasciende la investigación escrita. En el año 1975, junto al licenciado Roberto Beascoechea Lota, diseñó la bandera y el escudo oficial de Vega Alta, símbolos que hoy representan la identidad del municipio. En reconocimiento a su extraordinaria trayectoria, el Gobierno Municipal de Vega Alta lo designó Historiador Oficial en el año 1998, distinción que reafirma su legado como custodio de la memoria histórica del pueblo.

Además de su obra investigativa, Benjamín ha sido un colaborador activo en múltiples instituciones culturales y comunitarias, aportando su conocimiento y entusiasmo en iniciativas que fortalecen el quehacer cultural de Vega Alta. Su compromiso con la educación y la historia lo ha convertido en un recurso invaluable para estudiantes, investigadores y entidades comunitarias.

Designar el predio de terreno de la finca Carmen, donde ubica la histórica chimenea de la antigua Central Carmen, con el nombre de Benjamín Negrón Rodríguez, constituye un acto de justicia histórica y reconocimiento a una vida dedicada a preservar la memoria colectiva de su pueblo. Esta designación no solo honra su legado, sino que vincula de manera permanente su nombre con uno de los espacios más emblemáticos del patrimonio vegalteño.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se designa el predio de terreno de la finca Carmen, ubicada en el barrio Bajura del término municipal de Vega Alta, donde enclava la chimenea de la antigua Central Carmen, con el nombre de Benjamín Negrón Rodríguez.

Sección 2.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

ORIGINAL

RECIBIDO OCT 5'26 PM 4:54
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma Asamblea Legislativa

4ta Sesión Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

INFORME FINAL SOBRE LA

R. DEL S. 398

5 de octubre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor, previo estudio y consideración de la R. del S. 398, tiene a bien recomendar la aprobación de este informe final, con sus correspondientes hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. del S. 398 tiene el propósito de ordenarle a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la reconfiguración de plazas de peaje en expresos y autopistas de Puerto Rico a sistemas bidireccionales, incluyendo la metodología de cobro aplicada; determinar si las tarifas vigentes reflejan el cobro íntegro en ambas direcciones o una distribución proporcional del costo total por tramo; analizar comparativamente los recibos emitidos antes y después de dicha conversión; y verificar el cumplimiento con los requisitos de rotulación y divulgación del tarifario vigente.

Se nos señala en su Exposición de Motivos que, el sistema de peajes en Puerto Rico constituye uno de los principales mecanismos de financiamiento para la operación, conservación, mantenimiento y modernización de la infraestructura vial de la Isla. A través de este sistema se sufragan gastos asociados a la seguridad vial, la rehabilitación de pavimentos, la operación de centros de control de tránsito y el sostenimiento de servicios esenciales que permiten la movilidad segura y eficiente de personas y mercancías. La legitimidad de dicho modelo de financiamiento descansa en que el cobro de tarifas se realice de manera transparente, equitativa y conforme con las leyes, reglamentos, contratos y políticas públicas aplicables.

En años recientes, diversas plazas de peaje localizadas en expresos y autopistas de Puerto Rico han sido objeto de procesos de reconfiguración estructural y operacional, particularmente mediante la conversión a esquemas de peaje bidireccional. Estas transformaciones, si bien responden a consideraciones de eficiencia operacional, flujo vehicular y modernización del sistema, han generado inquietudes razonables entre los conductores y usuarios respecto a la estructura real del cobro que se les aplica tras la implementación de dichos cambios.

Particularmente, se ha planteado la preocupación pública de si en las nuevas configuraciones se está aplicando la tarifa completa en ambas direcciones de tránsito, lo que equivaldría a un incremento efectivo en el costo total del recorrido para el usuario promedio, o, si, por el contrario, la tarifa previamente vigente ha sido dividida proporcionalmente entre los tramos de ida y vuelta, reduciendo el costo individual por segmento. Esta distinción no es meramente técnica, sino que tiene un impacto directo en el bolsillo de miles de conductores que utilizan diariamente estas vías para fines laborales, educativos, comerciales y de servicios esenciales.

A lo anterior se suma la necesidad de examinar si los recibos de peaje, emitidos antes y después de la conversión, reflejan de manera clara, precisa y verificable cualquier cambio en la estructura tarifaria, así como si la información provista al usuario permite identificar adecuadamente el monto cobrado, el tramo correspondiente y la base legal o administrativa del tarifario vigente. La claridad en los recibos constituye un elemento fundamental de transparencia y rendición de cuentas en la prestación de servicios públicos.

De igual forma, resulta indispensable evaluar si la rotulación, señalización y divulgación instaladas en las inmediaciones de las nuevas plazas de peaje cumplen cabalmente con su función informativa. Los conductores deben contar con información visible, comprensible y oportuna sobre las tarifas aplicables antes de transitar por las plazas de peaje, de manera que puedan tomar decisiones informadas y conocer de antemano el costo del uso de dichas facilidades.

Esta investigación permitirá recopilar información técnica, administrativa y financiera confiable que sirva de base para que el Senado determine si las agencias concernidas han actuado conforme a sus deberes ministeriales, si los mecanismos de divulgación al público han sido adecuados y si resulta necesario considerar acciones legislativas, administrativas o correctivas adicionales en protección del interés general y de los consumidores en Puerto Rico.

Por tanto, y en atención a la importancia de garantizar un sistema de peajes justo, claro y conforme con la normativa vigente, se entiende necesario y apremiante investigar

la transparencia en el cobro de tarifas, fortalezca la confianza pública y proteja los derechos de los usuarios de las vías públicas de Puerto Rico.

INTRODUCCIÓN

La Resolución objeto de este informe persigue se investigue la reconfiguración de plazas de peaje en expresos y autopistas de Puerto Rico a sistemas bidireccionales, incluyendo la metodología de cobro aplicada; determinar si las tarifas vigentes reflejan el cobro íntegro en ambas direcciones o una distribución proporcional del costo total por tramo.

A tales efectos, el Senado de Puerto Rico, en el ejercicio de su facultad constitucional de investigación y fiscalización, tiene el deber de velar por la protección del interés público, por los derechos de los consumidores y por el cumplimiento de las normas que rigen la prestación de servicios públicos esenciales. En ese contexto, corresponde a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor llevar a cabo una investigación rigurosa, objetiva y documentada que permita conocer la metodología de cobro adoptada, evaluar su impacto económico sobre los usuarios y verificar si los procesos implementados cumplen con los principios de legalidad, equidad, razonabilidad y transparencia administrativa.

TRÁMITE PROCESAL

Para el cabal análisis de la medida, la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor, le solicitó memoriales explicativos al Departamento de Transportación y Obras Públicas, a la Autoridad de Carreteras y Transportación, al Departamento de Asuntos del Consumidor y a Autopistas Metropolitanas de Puerto LLC.

A continuación, nuestros hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre la Resolución objeto de análisis.

HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Indicaron desde el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación que, el 27 de junio de 2011, la ACT y Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico, LLC. (Metropistas) suscribieron un contrato de Alianza tras un proceso competitivo de licitación bajo la Ley 29-2009, Ley de Alianzas Publico-Privadas, según enmendada. Bajo el contrato de concesión, Metropistas se convirtió en el responsable de operar, rehabilitar, conservar y mejorar las Autopistas PR-5 y PR-22 durante un periodo de cuarenta (40) años. Posteriormente, en el 2016, la ACT y

Metropistas otorgaron una enmienda al contrato para extender la vigencia por diez (10) años adicionales, para un término total del contrato de cincuenta (50) años.

Así las cosas, en la enmienda quinta del contrato se incluyó una serie de modificaciones por Metropistas relacionadas a la implementación de peajes bidireccionales. Entre las enmiendas cobijadas se encuentra que la ACT accedió a extender el término de la concesión por diez (10) años adicionales y ajustar la distribución de los peajes cobrados de la PR-22. Esta enmienda también añadió un nuevo apéndice al contrato en relación con los excesos de ingresos de peajes que Metropistas acordó compartir con la ACT anualmente.

Señalaron, igualmente, que la mayoría de las obligaciones recaen sobre el concesionario, Metropistas, quien está a cargo de la administración de las autopistas. No obstante, la ACT también tiene la obligación de monitorear y supervisar que las operaciones de las autopistas se estén llevando a cabo de conformidad a los acuerdos alcanzados y a tenor con la regulación aplicable.

En cuanto a la configuración, el diseño y la política pública relacionada con las plazas de peajes, corresponde a la ACT de conformidad a la enmienda quinta del contrato de concesión entre Metropistas y la ACT.

La modernización del sistema de peajes persigue optimizar el flujo vehicular, mejorar a eficiencia operacional, reducir puntos de congestión y uniformar la distribución del tránsito a través de la infraestructura vial administrada mediante el sistema AutoExpreso.

Dichas modificaciones forman parte de una evolución operacional dirigida a mantener un sistema de recaudo más eficiente y tecnológicamente actualizado. Con la tecnología de cobro electrónico, el conductor paga solamente peaje por la dirección en que va, siento esto justo y equitativo para el usuario.

La conversión de plazas de peaje unidireccionales a plazas bidireccionales responde a un cambio en la ubicación y distribución del punto de recaudo, sin que ello implique, por sí solo, un incremento automático en el costo efectivo del recorrido para el usuario. En cuanto a las plazas de peajes en la PR-22 y en la PR-5, se cobra la mitad del peaje en cada una de las dos direcciones, en lugar de cobrar el doble en una sola dirección, incorporándose únicamente el ajuste contemplado en la referida enmienda contractual.

Por otro lado, toda modificación operacional en el sistema de peaje requiere que la información ofrecida al público sea clara, suficiente, visible y oportuna. En ese sentido, la ACT cuenta con normas y manuales de ingeniería de tránsito que regulan la señalización vial y sirven de referencia para la rotulación de la infraestructura. Conforme a dichas

normas, los conductores disponen de información visible sobre las tarifas aplicables antes de transitar por las estaciones de peaje. De igual forma, el tarifario vigente se encuentra disponible a través de la página electrónica de Metropistas.

En ese contexto, la ACT reconoce que la confianza de la ciudadanía en el sistema de peajes se fortalece mediante procesos transparentes, verificables y consistente con las tarifas oficialmente autorizadas. Por ello, no objetan la realización de la presente investigación, puesto que permite corroborar que los recibos emitidos reflejen correctamente las tarifas autorizadas y que la rotulación y divulgación del tarifario proporcionen a los usuarios información clara, previa y suficiente sobre el costo de utilización de la infraestructura vial.

Según el DACO, no tienen jurisdicción sobre los asuntos planteados en la medida legislativa, y recomendaron consultar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportación.

Comentaron desde Metropistas que, resulta importante señalar que la implantación de la bidireccionalidad en las plazas de peaje no fue una iniciativa desarrollada por Metropistas. La configuración, el diseño y la política pública relacionada con las plazas de peaje corresponde a la Autoridad de Carreteras y Transportación. En el caso particular de las autopistas PR-22 y PR-5, la bidireccionalidad fue implementada conforme a la Enmienda Núm. 5 del Contrato de Concesión entre Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico LLC y la ACT. La conversión, no tuvo el efecto de imponer el cobro completo del peaje en ambas direcciones de tránsito. Por el contrario, la tarifa previamente existente fue distribuida entre ambas direcciones, incorporándose únicamente el ajuste contemplado en la referida enmienda contractual. En otras. palabras, la tarifa aplicable se divide entre ambos sentidos de tránsito y se añadió el ajuste de $005 contemplado en la Enmienda Núm. 5.

Una fórmula similar fue utilizada en la PR-66, PR-53, PR-52 y PR-20, con la particularidad de que la implantación de la bidireccionalidad fue uno de los proyectos cuya responsabilidad fue retenida por la ACT tras la firma del Contrato de Concesión. Por ello, cualquier evaluación sobre la metodología de cobro debe considerar la estructura tarifaria aprobada por la ACT y documentación contractual que rigió la implantación de la bidireccionalidad.

La conversión a dicho modelo no representó un cobro duplicado por la utilización de las autopistas. Asimismo, la información relacionada con las tarifas aplicables ha estado disponible para los usuarios mediante la rotulación y señalización instalada en las plazas de peaje correspondientes. Los conductores cuentan información visible sobre las tarifas aplicables antes de transitar por las facilidades y dicha información también se encuentra

disponible a través de los canales informativos de Metropistas, incluyendo su página web.

Por tanto, entienden que la ACT se encuentra en mejor posición para proveer cualquier documentación técnica, financiera y operacional relacionada con la determinación de política pública que condujo la implantación de la bidireccionalidad, incluyendo los análisis que sustentaron la selección de este modelo y la estructura tarifarla correspondiente.

De acuerdo a la información suministrada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y Transportación y Metropistas, la configuración, el diseño y la política pública relacionada con las plazas de peajes, corresponde a la ACT de conformidad con contrato de concesión entre Metropistas y la ACT. De igual manera, señalaron que, la modernización del sistema de peajes persigue optimizar el flujo vehicular, mejorar la eficiencia operacional, reducir puntos de congestión y uniformar la distribución del tránsito a través de la infraestructura vial administrada mediante el sistema AutoExpreso. Dichas modificaciones forman parte de una evolución operacional dirigida a mantener un sistema de recaudo más eficiente y tecnológicamente actualizado. Con la tecnología de cobro electrónico, el conductor paga solamente peaje por la dirección en que va, siento esto justo y equitativo para el usuario.

Evaluados los comentarios vertidos por las antes mencionadas entidades, esta Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor entiende no se amerita continuar indagando sobre la reconfiguración de plazas de peaje en expresos y autopistas de Puerto Rico a sistemas bidireccionales.

Básicamente, esta política pública responde a la necesidad de modernizar, agilizar y mejorar los servicios que el Gobierno de Puerto Rico provee a la ciudadanía incluyendo, sin limitarse, incorporar nuevas tecnologías, mejorar sus bases de datos, facilitar la cooperación con otras agencias, expandir los servicios disponibles a través de portales cibernéticos e incorporar el uso de aplicaciones para teléfonos móviles, entre otros.

Por las consideraciones antes expuestas, esta Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación de este informe final sobre la R. del S. 398, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, y que el mismo se remita al Departamento de Transportación y Obras Públicas, a la Autoridad de Carreteras y Transportación y a Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico LLC, para su conocimiento y acción correspondiente.

Respetuosamente sometido,

Hon. Héctor Joaquín Sánchez Álvarez
Presidente
Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos
y Asuntos del Consumidor

ORIGINAL

RECIBIDO OCT 5'26 PM 4:54
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma Asamblea Legislativa

4ta Sesión Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

INFORME FINAL SOBRE LA

R. DEL S. 481

5 de octubre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor, previo estudio y consideración de la R. del S. 481, tiene a bien recomendar la aprobación de este informe final, con sus correspondientes hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. del S. 481 tiene el propósito de ordenarle a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, investigar el estado de los caminos, carreteras estatales y municipales y de cualquier otra vía pública en los municipios que componen el Distrito Senatorial de Ponce, y su impacto en la calidad de vida y bienestar social de los residentes de estos municipios; y para otros fines relacionados.

Se nos señala en su Exposición de Motivos que, el Distrito Senatorial de Ponce, compuesto por los municipios de Adjuntas, Ciales, Guánica, Guayanilla, Jayuya, Juana Díaz, Lajas, Lares, Las Marías, Maricao, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, Utuado y Yauco, afrontan grandes retos para desarrollarse debido a los múltiples eventos naturales y atmosféricos que les han abatido directamente.

Indudablemente, estos eventos han tenido un impacto directo en la calidad de vida de los residentes de este distrito. De hecho, puede señalarse que han acelerado el deterioro de infraestructura que impacta directamente a cientos de miles de puertorriqueños. Particularmente, muchos caminos, carreteras estatales y municipales y otras vías públicas se encuentran en condiciones que afectan la calidad de vida de los conductores que las utilizan a diario.

Al presente, varias carreteras estatales en el distrito exhiben deterioro, entre estas: la PR-143, que discurre entre Ponce y Jayuya; la PR-124, entre Lares y Las Marías; la PR 135, del Barrio Capáez en Adjuntas; la PR-146, entre Utuado y Ciales; la PR-632, del Barrio Hato Viejo en Ciales; la PR-511, en el Barrio Real Anón en Ponce; la PR-105, en Maricao; la PR-366, entre Maricao y Sabana Grande; la PR-611, en Utuado; la PR-106, entre Las Marías, Maricao y Mayagüez; el alumbrado de la PR-116, entre Guánica y Lajas; la PR-128, entre Yauco y Lares; la PR-111, entre Utuado y Lares; entre otras.

En virtud de lo anterior, se entiende adecuado autorizar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor a investigar las condiciones de la infraestructura vial en el Distrito de Ponce. De esta manera, nos aseguramos de que se tomen las medidas pertinentes, incluyendo la aprobación de legislación para promover el bienestar de esta región.

INTRODUCCIÓN

La Resolución objeto de este informe persigue se investigue el estado de los caminos, carreteras estatales y municipales y de cualquier otra vía pública en los municipios que componen el Distrito Senatorial de Ponce.

A tales efectos, la R. del S. 481 se aprueba bajo la premisa de que los residentes del Distrito Senatorial de Ponce merecen que se adopten políticas encaminadas a mejorar su bienestar. Atrás deben quedar los tiempos en que se cancelan proyectos de nuevas carreteras, la espera de años por la construcción de proyectos o la reparación de carreteras. El Senado de Puerto Rico tiene el deber y las herramientas para defender este sector de la población y así ha determinado hacerlo mediante la presente Resolución.

TRÁMITE PROCESAL

Para el cabal análisis de la medida, la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor, le solicitó memoriales explicativos a la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, a la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, al Departamento de Transportación y Obras Públicas, a la Autoridad de Carreteras y Transportación y a la Oficina del Procurador del Ciudadano. Al momento de la redacción de este informe final, solo el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y Transportación y la Oficina del Procurador del Ciudadano habían hecho entrega de la ponencia peticionada.

A continuación, nuestros hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre la Resolución objeto de análisis.

HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Indicaron desde el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación lo siguiente:

A. Carr. PR-135, Municipio de Adjuntas: Para la repavimentación de la carretera el DTOP tiene un convenio colectivo con el Municipio de Adjuntas, 2026-00276.

B. Carr. PR 511, Municipio de Ponce: Para la repavimentación de la carretera el DTOP está esperando a que la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico autorice el dinero para poder hater un convenio colectivo con el Municipio de Ponce.

C. Carr. PR-611, Municipio de Utuado: Proyecto AC-240119: Consiste en un proyecto de emergencia, Task of Order #2, Carr. PR-611, Km. 2, en que se realizará la construcción de un muro de gavión, mejoras de drenaje, asfalto, marcado termoplástico y guard rail.

D. Carr. PR-111, Municipio de Utuado:

Proyecto AC-111133: Consiste en un proyecto de tres sites: Km. 48.5: construcción de parapeto; Km. 50.3: construcción de un muro de hormigón; y Km. 55.4: mejoras de drenaje, incluyendo asfalto, marcado termoplástico y guard rail.

Proyecto AC-820647: Se están terminando los sites en Utuado. Consiste en un proyecto de emergencia, Task of Order #2, Km. 55.6, Task of Order #4, Km. 67.3, Task of Order #5, Km. 65.75 y el Task of Order #17, Km. 57.1. Todos estos sites conllevan la construcción de muros de gavión, asfalto, mejoras de drenajes, marcado termoplástico y guard rail.

Proyecto AC-260008: El proyecto está terminado. Km. 58.3 y Km. 58.1. Construcción de pedraplén y muro de hormigón, se asfaltó, se realizaron mejoras de drenaje, marcado termoplástico y guard rail.

E. Carr. PR-146, Municipio de Ciales: Proyecto AC-820647: Consiste en un proyecto de emergencia, Task of Order #18. Km. 23.1. Los trabajos de reparación consisten en reconstruir una sección de carreteras afectada por un deslizamiento de terreno. Se realizará lo siguiente: instalación de dispositivos de seguridad, remoción de estructura, remoción de material inestable, instalación de tubería perforada para el recogido de agua subterránea, construcción de un stone revetment, depósito y compactación de material selecto, construcción de cunetones y encintado, depósito y compactación de asfalto, marcado de pavimento, instalación de guard rail, entre otros. En estos momentos la ACT junto a los diseñadores se encuentran evaluando un request for information sometido por el contratista en relación a una tubería perforada.

F. Carr. PR-143: Km. 1.7, Municipio de Adjuntas, reparada; Km. 17.2, Municipio de Jayuya, reparada; Km. 7.2 y 7.65, Municipio de Ponce, reparada.

G. Carr. PR-135, Municipio de Adjuntas: Km. 15.5-15.6, Task of Order: $200,000.00. Km. 13.4: reparada; Km. 18.9: reparada a un costo de $41,622.59; Km. 21.2: reparada a un costo de $350,075.00.

H. Carr. PR-511, Municipio de Ponce: Kms. 11.9-15.8, reparación a un costo estimado de $500,000.00.

De otra parte, el Procurador del Ciudadano esbozó que las carreteras y demás vías públicas representan un componente esencial de la infraestructura de la isla. Su adecuado diseño, mantenimiento, rotulación y conservación no solo facilitan el tránsito seguro y eficiente, sino que también contribuyen a reducir riesgos de accidentes, mejorar los tiempos de respuesta en situaciones de emergencia y garantizar una adecuada conectividad entre las distintas regiones de Puerto Rico.

Luego del paso del huracán María, esta Oficina ha recibido de forma continua reclamaciones relacionadas con el estado de las carreteras, la falta de mantenimiento, la reparación o repavimentación de vías públicas y la ausencia o deterioro de la rotulación en la zona escolar. En numerosos casos, los ciudadanos acuden ante nosotros, ante la percepción de que las situaciones reportadas permanecen sin atender o no han sido corregidas de manera oportuna por las agencias con jurisdicción.

Como consecuencia, esta Oficina, en virtud de la Orden Administrativa Núm. 04-001, creó el Proyecto "PA' LA CALLE" con el fin de que todo el personal fuese proactivo en notificar situaciones captadas en las vías públicas estatales. Para este proyecto se estableció un plan de acción mediante el cual los investigadores de la Oficina identificaron incidencias como: deterioro de las vías públicas, roturas, salideros, fallas en la infraestructura eléctrica de alumbrado y/o comunicaciones, marcado peatonal, rotulación en la ona escolar, así como todas las instancias que representaran una vulneración a la seguridad vial, peatonal y a la calidad de vida de la ciudadanía. En esa iniciativa, los investigadores pudieron identificar 2,184 incidencias.

Al presente, la Oficina mantiene 364 casos activos del Proyecto "PA' LA CALLE" y 18 casos activos de reclamaciones emitidas por ciudadanos correspondientes al Distrito Senatorial de Ponce, de los cuales 13 responden a reclamaciones sobre falta de rotulación, 2 a solicitudes relacionadas con reparaciones o repavimentación de vías públicas y 3 a asuntos de mantenimiento de carreteras. De igual forma, la Oficina mantiene aproximadamente 434 casos activos del Departamento de Transportación y Obras Públicas, quienes han sido proactivos en la atención de las reclamaciones y 101 de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), de naturaleza similar, a nivel de Puerto

Rico, lo que evidencia que estas preocupaciones trascienden los límites geográficos del Distrito Senatorial de Ponce y constituyen una situación de interés público de mayor alcance.

De acuerdo a la información suministrada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación, ya se encuentran atendiendo varias carreteras del Distrito Senatorial de Ponce que incluyen la Carr. PR-135, Carr. PR 511, Carr. PR-611, Carr. PR-111, Carr. PR-146, Carr. PR-143, Carr. PR-135, y la Carr. PR-511. Estas reparaciones son parte de la visión del Gobierno de Puerto Rico para identificar soluciones viables, eficientes y sostenibles que contribuyan al fortalecimiento de la infraestructura vial de la isla.

Evaluados los comentarios vertidos por las antes mencionadas entidades, esta Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor entiende no se amerita continuar indagando sobre el estado de los caminos, carreteras estatales y municipales y de cualquier otra vía pública en los municipios que componen el Distrito Senatorial de Ponce.

Por las consideraciones antes expuestas, esta Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación de este informe final sobre la R. del S. 481, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, y que el mismo se remita al Departamento de Transportación y Obras Públicas, a la Autoridad de Carreteras y Transportación y a la Asociación y Federación de Alcaldes de Puerto Rico, para su conocimiento y acción correspondiente.

Respetuosamente sometido,

Hon. Héctor Joaquín Sánchez Álvarez
Presidente
Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos
y Asuntos del Consumidor

ORIGINAL

RECIBIDO OCT 7'26 AM 11:40
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 595

INFORME POSITIVO

7 de octubre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos, previo análisis y consideración, recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 595, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

La R. del S. 595, según referida, propone ordenar a la Comisión de lo Jurídico del Senado llevar a cabo una investigación legislativa exhaustiva sobre el estado de la administración de la justicia en Puerto Rico con el fin de recabar hallazgos y recomendaciones que propendan a la formulación de un ordenamiento jurídico más coherente, eficiente y compatible a nuestros tiempos; y para otros fines relacionados.

Según se despende de la medida bajo estudio, esta Comisión reconoce que los sistemas de justicia no son estructuras inmutables y requieren evaluación continua. La administración adecuada de la justicia constituye un elemento fundamental del estado de derecho y su funcionamiento adecuado incide directamente sobre la protección de los derechos, la seguridad pública, la solución ordenada de las controversias, el acceso a remedios ágiles y efectivos y la confianza de la ciudadanía en general en sus instituciones.

Ante ello, el sistema debe estar sujeto a análisis constante y a transformaciones que le permitan responder con prontitud y efectividad a los cambios sociales, económicos y tecnológicos vigentes, para asegurar que sus procesos, recursos y normas respondan a

dichas realidades. En dicho contexto, resulta pertinente y necesario que este Alto Cuerpo, por virtud de sus facultades constitucionales, examine su estado actual, pues las deficiencias del ordenamiento vigente pueden incidir directamente en la eficiencia, calidad y efectividad en la administración de la justicia.

El derecho, tanto sustantivo como procesal, así como las estructuras institucionales encargadas de aplicarlo, enfrentan retos que pueden afectar la calidad y uniformidad de los servicios. Entre estos, la disponibilidad y distribución de los recursos, el acceso a representación legal, la digitalización de los procesos, la extensión de los casos, la coordinación interagencial y el cumplimiento efectivo de las determinaciones judiciales. A tales fines, la investigación propuesta permitirá determinar la manera en que estos factores interactúan, así como identificar aquellas respuestas legislativas que podrían resultar necesarias.

Esta Comisión reconoce que la administración de la justicia comprende un sistema integrado por distintos componentes cuyas funciones inciden y se relacionan estrechamente. El funcionamiento de los organismos investigativos, el Ministerio Público, los tribunales, las instituciones correccionales y los distintos mecanismos de rehabilitación y reinserción social puede impactar las distintas etapas del proceso. Consecuentemente, resulta razonable que la investigación propuesta examine la ejecución general del sistema, sin limitarse a situaciones individuales o a una evaluación fraccionada del mismo.

Esta Comisión entiende que, la Resolución bajo examen permitirá recopilar información objetiva sobre las condiciones actuales del sistema, identificar posibles deficiencias estructurales y determinar si existen normas que deban revisarse, actualizarse o armonizarse. También permitirá evaluar la disponibilidad de recursos humanos, fiscales y tecnológicos con los que cuentan las entidades concernidas para el cumplimiento cabal de sus responsabilidades, así como los mecanismos de coordinación y rendición de cuentas existentes.

La facultad investigativa de la Asamblea Legislativa es una inherente a su función constitucional de legislar. Para poder determinar si la legislación vigente cumple sus

objetivos, si existen vacíos normativos y si la asignación y distribución de recursos es adecuada, el Senado necesita información actualizada, suficiente y confiable. A tales fines, la investigación propuesta constituye un mecanismo legitimo para desarrollar política pública de manera informada, ordenada y fundamentada. Según resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en *Peña Clos v. Cartagena Ortiz*, 114 D.P.R. 576 (1983), el poder de investigación es inherente a la creación de la Rama Legislativa y constituye secuela indispensable del propio poder de legislar.

Es preciso añadir que, este poder investigativo no es absoluto; su ejercicio no puede ser arbitrario, debe responder a un propósito legislativo sin menoscabar garantías constitucionales ni invadir los poderes de las otras ramas de Gobierno. Es por ello que, todo examen relacionado a la administración de la justicia debe respetar estrictamente las separación de poderes y la independencia judicial.

A tales fines, esta Comisión reconoce que la medida presentada delimita adecuadamente su propósito, estableciendo que la investigación no procura intervenir en la función adjudicativa de los tribunales ni menoscabar facultades constitucionales de la Rama Judicial. El objeto de la investigación deberá mantenerse enfocado en asuntos sistémico, presupuestarios, administrativos y legislativos.

Por consiguiente, esta Comisión entiende que la R. del S. 595 constituye un ejercicio legítimo, mesurado y necesario de la facultad investigativa que la Constitución reconoce a este Cuerpo. La investigación que se ordena permitirá evaluar el sistema de justicia desde una perspectiva integral, identificar deficiencias, promover soluciones fundamentadas y acciones legislativas dirigidas a fortalecer el mismo, para hacerlo más robusto y eficiente, conforme a las necesidades contemporáneas de la administración de la justicia en Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 595, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,

Thomas Rivera Schatz
Presidente

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma Asamblea Legislativa

4ta Sesión Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 595

9 de septiembre de 2026

Presentada por el senador *Toledo López*

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico del Senado *de Puerto Rico* a llevar a cabo una investigación ~~legislativa~~ exhaustiva sobre el estado de la administración de la justicia en Puerto Rico con el fin de recabar hallazgos y recomendaciones que propendan a la formulación de un ordenamiento jurídico más coherente, eficiente y compatible a nuestros tiempos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La administración de la justicia constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho y un elemento indispensable para garantizar la convivencia ordenada, la protección de los derechos y la confianza ciudadana en las instituciones. No obstante, los sistemas de justicia no son estructuras estáticas, pues requieren evaluación continua para asegurar que sus procesos, recursos y normas respondan de manera efectiva a las realidades sociales, económicas y tecnológicas de su tiempo. Los desafíos que enfrenta nuestro ordenamiento inciden directamente sobre la calidad y prontitud de la justicia que recibe la ciudadanía, así como sobre la legitimidad del propio sistema.

Así, pues, resulta imperativo que el Senado, en el ejercicio de su facultad constitucional de investigación y fiscalización, lleve a cabo un examen abarcador y riguroso del estado actual de la administración de la justicia en Puerto Rico. Dicha

facultad es inherente al poder de legislar, pues permite a la Asamblea Legislativa recabar la información necesaria para evaluar la eficacia del ordenamiento vigente, identificar asuntos que requieran atención legislativa y formular política pública informada.

Este ejercicio se realizará con pleno respeto al principio de separación de poderes, a la independencia judicial y a las facultades constitucionales que corresponden al ~~poder~~ *Poder* Judicial. La investigación no pretende intervenir en la función adjudicativa de los tribunales, revisar determinaciones judiciales ni menoscabar la autonomía institucional de dicho Poder. Sin embargo, esa deferencia no priva a la Asamblea Legislativa de ejercer su propia prerrogativa constitucional de investigar y fiscalizar aquellos asuntos relacionados con la administración de la justicia que puedan requerir legislación, asignación de recursos o la revisión de la política pública vigente.

La investigación permitirá identificar deficiencias estructurales, prácticas administrativas susceptibles de mejora y áreas en las que el ordenamiento vigente deba ser atemperado o revisado. Por lo tanto, este Senado entiende necesario ordenar a su Comisión de lo Jurídico la realización de una investigación que permita recabar información, evaluar el funcionamiento de las entidades concernidas y proponer soluciones que redunden en una administración de la justicia más efectiva, transparente y acorde con las necesidades de nuestro Pueblo.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1. – Se ordena a la Comisión de lo Jurídico *del Senado de Puerto Rico* a llevar a cabo una investigación ~~legislativa~~ *exhaustiva* sobre el estado de la administración de la justicia en Puerto Rico. Para cumplir con este mandato podrá citar testigos, recopilar prueba, tomar juramentos, valerse de todos los recursos humanos que tenga a su disposición, ejercer las prerrogativas que le concede la Constitución, las Leyes y el Reglamento del Senado, celebrar vistas públicas, vistas oculares, reuniones ejecutivas y cualquier otro mecanismo legislativo permitido.

La Comisión de lo Jurídico, en el descargo de su responsabilidad, tendrá jurisdicción sobre todos los componentes del sistema de justicia en Puerto Rico, incluyendo, pero no limitándose a, el Departamento de Justicia, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Junta de Libertad Bajo Palabra, la Oficina de Administración de los Tribunales, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Seguridad Pública y su Negociado de Investigaciones Especiales, y cualquier entidad pública, cuasipública o privada que ostente injerencia sobre la administración de la justicia.

Sección 2. – La Comisión de lo Jurídico podrá rendir cuantos informes parciales estime necesarios, de tiempo en tiempo, a los fines de consignar e informar al Senado de los hallazgos preliminares y las recomendaciones que surjan del proceso investigativo. Asimismo, deberá rendir un informe final sobre los hallazgos de la investigación que aquí se ordena antes de que culmine el término de la Vigésima Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Dicho informe ~~tendrá el propósito de recopilar~~ *consolidará* los hallazgos y recomendaciones que emanen de la investigación, de manera que sirvan de base para la formulación de enmiendas legislativas o la creación de nuevas ~~disposiciones de ley~~ *leyes* que propendan al fortalecimiento del ordenamiento jurídico vigente, haciéndolo más robusto, eficiente y apto para atender las necesidades contemporáneas de la administración de la justicia en Puerto Rico.

Sección 3. – Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

RECIBIDO OCT 7'26 PM 12:04
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

20 ma. Asamblea Legislativa

4ta. Sesión Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 597

INFORME POSITIVO

7 de octubre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos, previo análisis y consideración, recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 597, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

La R. del S. 597, según referida, propone ordenar a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales a realizar una investigación sobre en qué etapa se encuentran o cuáles han sido los resultados de los contratos de gestión extendidos en el 2024 de las zonas recreativas del Balneario de Punta Salinas y del Parque Nacional Isla de Cabras, suscritos entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Municipio de Toa Baja, en cuanto a infraestructura, seguridad y vigilancia de dichas zonas; y para otros fines relacionados.

Esta Comisión reconoce que, conforme se establece en la medida bajo estudio, tanto el Balneario de Punta Salinas y el Parque Nacional Isla de Cabras, constituyen importantes recursos recreativos, naturales, históricos y culturales para los residentes del Municipio de Toa Baja y para la ciudadanía en general. Ambas instalaciones forman parte del patrimonio público y han servido históricamente como espacios destinados al esparcimiento, la recreación y el disfrute de los recursos costeros del país. Por su naturaleza y ubicación, estas zonas representan, además, espacios de particular valor para el turismo interno y para el desarrollo de actividades recreativas accesibles a la ciudadanía.

A tales fines, la conservación y adecuada operación de estas instalaciones requiere atención continua por parte de las entidades responsables de su administración, particularmente cuando se trata de propiedades públicas cuyo uso beneficia directamente a las comunidades y visitantes que acuden a ellas.

El Gobierno de Puerto Rico, mediante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), tiene la responsabilidad de administrar y proteger los recursos naturales y ambientales del país, así como de promover su conservación y aprovechamiento de manera compatible con el interés público. De igual forma, corresponde procurar que los acuerdos de administración y gestión de estas propiedades públicas produzcan resultados concretos en beneficio de la ciudadanía.

Conforme surge de la Exposición de Motivos, ambas instalaciones fueron severamente afectadas por el paso del Huracán María, lo que ocasionó un deterioro significativo de sus facilidades y contribuyó a que permanecieran cerradas desde el año 2022. En atención a esta situación, el Municipio de Toa Baja gestionó el traspaso de la administración de ambas instalaciones del DRNA al municipio. Como parte de dicho proceso, en marzo de 2022, se suscribió un acuerdo entre ambas entidades y, posteriormente, en septiembre de ese mismo año, entró en vigor el traspaso administrativo formal. Como resultado del acuerdo alcanzado, ambas instalaciones fueron objeto de trabajos de rehabilitación y posteriormente reabrieron al público. Posteriormente, los acuerdos fueron enmendados a los fines de extender la vigencia, y a su vez, reducir la aportación financiera del Municipio al DRNA de los ingresos netos derivados de la operación de las instalaciones.

Esta Comisión admite que la reapertura de estas zonas recreativas constituye un paso importante para restituir a la ciudadanía espacios públicos destinados al disfrute de los recursos naturales y a la recreación. No obstante, la reapertura de las instalaciones no constituye el punto final de las responsabilidades de administración y mantenimiento. La conservación de estas facilidades requiere una gestión continua que permita atender las necesidades de infraestructura, seguridad, mantenimiento y operación que surjan con posterioridad.

Esta Comisión reconoce el valor de los acuerdos colaborativas entre el Gobierno central y los municipios cuando estos permiten rehabilitar instalaciones públicas, acercar su administración a las comunidades y restablecer servicios recreativos. La reapertura del Balneario de Punta Salinas y del Parque Nacional de Isla de Cabras representa un resultado importante. Sin embargo, a juicio de esta Comisión, la extensión de los acuerdos y la modificación de sus términos económicos hacen meritorio que el Senado cuente con información actualizada, verificable y completa sobre su ejecución. Una relación contractual de quince (15) años implica un compromiso de administración a largo plazo sobre propiedades públicas de considerable valor recreativo, natural e histórico. Por ello, resulta razonable evaluar si las condiciones pactadas han permitido alcanzar los objetivos de rehabilitación, mantenimiento y operación de las instalaciones, así como determinar si los recursos generados y las responsabilidades asumidas por las partes se han traducido en mejoras concretas y sostenibles para beneficio de sus usuarios.

La investigación propuesta permitirá evaluar el cumplimiento formal de los contratos, si el modelo de gestión vigente ha resultado efectivo para garantizar el mantenimiento y conservación de las propiedades y si las condiciones establecidas en los acuerdos permiten atender adecuadamente las necesidades presentes y futuras de las instalaciones. Asimismo, permitirá evaluar el estado de la infraestructura, las carreteras y vías de acceso, las condiciones de seguridad y vigilancia, así como cualquier otra circunstancia que pueda afectar el uso adecuado de las zonas recreativas por parte de la ciudadanía.

La transparencia en el manejo de los recursos destinados a propiedades públicas constituye un elemento esencial para evaluar la efectividad de las acciones administrativas y determinar si los recursos disponibles han sido utilizados de manera adecuada para atender las necesidades

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 597, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,

Thomas Rivera Schatz
Presidente

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma Asamblea Legislativa

4ta Sesión Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 597

14 de septiembre de 2026

Presentada por la señora *Padilla Alvelo*

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales *del Senado de Puerto Rico* a realizar una investigación sobre *el estado de ejecución y* ~~en qué etapa se encuentran o cuáles han sido~~ los resultados de los contratos de gestión extendidos en ~~el~~ 2024 ~~de~~ *para* las zonas recreativas del Balneario de Punta Salinas y del Parque Nacional Isla de Cabras, suscritos entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el ~~Municipio~~ *municipio* de Toa Baja, *particularmente,* en cuanto a *su* infraestructura, *carreteras,* seguridad y vigilancia ~~de dichas zonas~~; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Balneario de Punta Salinas y el Parque Nacional Isla de Cabras son destinos costeros históricos del municipio de Toa Baja. *Estos,* ~~Son patrimonios~~ *son patrimonio* de nuestro país, ~~y~~ albergan gran historia y cultura, *y.* ~~Han~~ *a través de los años, han* sido utilizados ~~históricamente~~ para el disfrute recreativo de la ciudadanía. El ~~balneario~~ *Balneario* de Punta Salinas ofrece áreas verdes para la recreación, canchas de baloncesto, área de vóleibol de playa y *servicio de* salvavidas~~,~~; mientras que Isla de Cabras cuenta con facilidades recreativas para actividades familiares, además de ser un lugar propicio para caminar y pescar.

Ambas facilidades habían sido administradas por el DRNA. ~~Luego del~~ *Sin embargo, tras el paso del* Huracán María ~~el municipio de Toa Baja fue gravemente afectado, ambas facilidades tuvieron~~, *el cual afectó gravemente al municipio de Toa Baja, dichas instalaciones sufrieron* un deterioro palpable que provocó ~~el cierre de ambas zonas en el~~ *su cierre en* 2022. ~~En cuanto al~~ *En el* Balneario de Punta Salinas, al momento del cierre se identificaron problemas críticos de infraestructura~~: el~~, *entre ellos el* estado del sistema de bombas de tratamiento de aguas usadas y la situación de los baños~~, entre otros asuntos~~. ~~El deterioro de Isla de Cabras ha sido documentado por visitantes, que exponen una falta de mantenimiento del parque debido a fondos insuficientes.~~ *Por su parte, en Isla de Cabras, visitantes han documentado la falta de mantenimiento del parque por insuficiencia de fondos.*

En respuesta a esta situación, desde el 2020, el municipio gestionó el traspaso de la administración del Balneario de Punta Salinas y del Parque Nacional Isla de Cabras del DRNA al municipio de Toa Baja. *Tras dicha gestión,* ~~En~~ *en* marzo de 2022 se firmó ~~el~~ *un* acuerdo entre el DRNA y el ~~municipio~~ *Municipio*~~.~~, *el cual* ~~El traspaso~~ fue avalado por el ~~del~~ Servicio de Parques Nacionales debido a que las instalaciones habían recibido fondos del "Land and Water Conservation Fund" (LWCF). Dicho programa federal es supervisado por el Servicio de Parques Nacionales, por eso cualquier cambio de administrador requería su aprobación. En septiembre ~~de 2022~~ *del mismo año* entró en vigor el traspaso administrativo formal, y ~~ambas instalaciones cerraron para realizar~~ *las instalaciones permanecieron cerradas mientras se realizaban* labores de mejoras y renovación.

Ambas instalaciones fueron rehabilitadas bajo ~~este~~ *los* ~~acuerdo~~ *acuerdos suscritos* y ~~tuvieron reaperturas exitosas. Actualmente, los ciudadanos disfrutan nuevamente de estas zonas que tienen tanto para ofrecer.~~ *reabrieron al público, por lo que actualmente la ciudadanía puede disfrutarlas nuevamente*. En ~~el~~ 2024, ~~estos~~ *los* contratos fueron enmendados~~. Entre las modificaciones, se extiende la~~ *para extender su* duración ~~de los contratos~~ a quince (15) años, con opciones de renovación cada cinco (5) años, ~~a menos que~~ *salvo que* alguna de las partes decida lo contrario antes de finalizar el periodo contractual vigente. A su vez, *las* ~~estas~~ enmiendas *efectuadas* ~~incluyen~~ *incluyeron* una reducción en la

contribución financiera del ~~municipio~~ *Municipio* al DRNA, de un cincuenta por ciento (50%) a un veinte por ciento (20%) de los ingresos netos obtenidos de las operaciones.

A dos años de la extensión de estos acuerdos colaborativos operacionales, resulta necesario conocer las acciones realizadas por el municipio de Toa Baja y el DRNA en beneficio del Balneario de Punta Salinas y del Parque Nacional Isla de Cabras desde su reapertura. ~~En atención a lo anterior~~ *Por ello*, el Senado de Puerto Rico considera meritorio realizar una investigación que permita evaluar las necesidades de ~~las~~ *estas* zonas y ~~en qué condiciones se encuentran las instalaciones respecto a~~ *las condiciones en que se encuentran sus instalaciones en cuanto a* infraestructura, carreteras ~~y~~, seguridad *y vigilancia* para los ciudadanos.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales *del Senado de Puerto Rico* a realizar una investigación sobre las condiciones en que se encuentran las zonas recreativas del Balneario de Punta Salinas y del Parque Nacional Isla de Cabras, la cual ~~que~~ a su vez, permita evaluar ~~las~~ *sus* necesidades ~~respecto~~ *en cuanto* a infraestructura, carreteras ~~y~~, seguridad *y vigilancia*, luego de la extensión de ~~estos contratos~~ *los contratos de gestión suscritos entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el municipio de Toa Baja*.

Sección 2.- La Comisión podrá requerir al ~~Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)~~ *DRNA* y al municipio de Toa Baja toda información, documentación, estadísticas y datos que estime necesarios para llevar a cabo la investigación ordenada en esta Resolución, incluyendo *la celebración* de reuniones, ~~vistas~~ *inspecciones* oculares y vistas públicas~~, sin limitarse a:~~.

Sección 3. – La investigación deberá incluir, sin que se entienda como una limitación:

a) ~~Desglosar~~ *un desglose del* ~~el~~ presupuesto asignado para las mejoras de estas zonas recreativas *y un* ~~e informar~~ *informe de* ~~los~~ gastos de los fondos utilizados.

b) *el estado de las* ~~Indicar, de quedar~~ mejoras pendientes, ~~en cuánto~~ y *el* tiempo *en que* se proyecta que se completen las mismas.

c) ~~Informar~~ cualquier *información relacionada con algún* impedimento que haya provocado la demora o la paralización de las mejoras.

Sección ~~3~~ 4.-La Comisión rendirá al Senado de Puerto Rico un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo las acciones legislativas o administrativas que estime necesarias, dentro de los noventa (90) días siguientes a la aprobación de esta Resolución.

Sección 4 5.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

ORIGINAL

RECIBIDO OCT 7'26 AM 11:40
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma. Asamblea Legislativa

4ta. Sesión Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 602

INFORME POSITIVO

7 de octubre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos, previo análisis y consideración, recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 602, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

La R. del S. 602, según referida, propone ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva acerca del curso del proceso electoral en las escuelas públicas de nivel superior; y para otros fines relacionados.

La participación informada en los procesos democráticos requiere que las personas conozcan el funcionamiento de los procesos, desde cómo se inscriben para votar, cuáles son los requisitos para ejercer el derecho y cómo se desarrolla una elección. En dicho contexto, la escuela superior ofrece una oportunidad para que los jóvenes adquieren esos conocimientos antes de alcanzar la edad requerida para votar y se conviertan en electores.

Según surge de la Exposición de Motivos de la Resolución bajo estudio, el Departamento de Educación cuenta con el Módulo Didáctico de Estudios Sociales para el nivel superior ESSO 131-1632, titulado "Educación en Procesos Electorales y Parlamentarios", incluido en el Catálogo General de Cursos 2023-2027. A tales fines, la existencia de dicho módulo constituye un punto de partida para la investigación propuesta, pero no permite establecer, por sí sola, en cuántas escuelas efectivamente

ofrecen el curso, cuántos estudiantes participan o qué materiales se utilizan actualmente. Ante ello, esta Comisión considera pertinente obtener dicha información y examinar la vigencia del prontuario identificado en la medida.

La investigación propuesta también permitiría conocer los recursos educativos utilizados, el personal encargado de impartir la enseñanza, la cantidad de estudiantes que participan, así como el alcance de la educación relacionada con el proceso electoral; si los estudiantes reciben orientación práctica sobre la inscripción electoral, los requisitos para votar, los derechos y responsabilidades de los electores y los pasos para emitir el voto. Asimismo, facilitaría evaluar la coordinación entre el Departamento de Educación y la Comisión Estatal de Elecciones en las actividades dirigidas a la educación y orientación a los jóvenes en los procesos electorales.

Esta Comisión reconoce que la educación pública debe contribuir a la formación integral de los estudiantes y brindarles los conocimientos necesarios para comprender sus derechos y responsabilidades como ciudadanos. Dada la importancia del proceso electoral para el ejercicio de la democracia, la investigación propuesta permitirá al Senado de Puerto Rico obtener información oficial y actualizada sobre su enseñanza en las escuelas públicas de nivel superior. También permitirá examinar la disponibilidad y el uso de los recursos educativos existentes, así como la coordinación entre las agencias concernidas. A partir de sus hallazgos, podrán identificarse áreas que requieran fortalecimiento y formularse recomendaciones legislativas o administrativas debidamente fundamentales en información actualizada y certera.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 602, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,

Thomas Rivera Schatz
Presidente

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea Legislativa

4ta. Sesión Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 602

17 de septiembre de 2026

Presentada por la señora *Padilla Alvelo*

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva acerca ~~del curso~~ *de la enseñanza* del proceso electoral en las escuelas públicas de nivel superior; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proceso electoral es un elemento fundamental de la democracia, ya que permite a los ciudadanos participar en la selección de las personas que ocuparán cargos públicos. Por esta razón, es importante que los estudiantes conozcan desde su etapa escolar cómo funciona el proceso ~~electoral~~, cuáles son sus derechos y responsabilidades como electores y ~~la importancia de participar~~ *que su participación se efectúe* de manera informada.

La educación sobre el proceso electoral puede contribuir a que los jóvenes comprendan la importancia de ejercer su derecho al voto y de participar responsablemente en los asuntos públicos. Asimismo, conocer los pasos que forman parte de una elección, desde el registro como elector hasta la emisión del voto, puede ayudar a los estudiantes a familiarizarse con el proceso y aclarar dudas sobre su funcionamiento.

En el ámbito educativo, el Departamento de Educación cuenta con un Módulo Didáctico de Estudios Sociales de nivel superior, identificado como ESSO 131-1632, titulado "Educación en Procesos Electorales y Parlamentarios", según consta en el Catálogo General de Cursos (2023-2027). Este módulo tiene como objetivo que los estudiantes conozcan los procesos electorales y las leyes que los regulan, así como ofrecer una introducción al proceso parlamentario y a las normas que rigen su funcionamiento. Entre los temas que se abordan se encuentran el Estado, los partidos políticos, el voto y el escrutinio, la participación electoral y los procesos parlamentarios, entre otros. No obstante, el último prontuario disponible del módulo corresponde a agosto de 2020 y establece una duración de 20 semanas. Ante la existencia de este recurso educativo, resulta pertinente examinar su utilización en las escuelas de nivel superior.

La Comisión Estatal de Elecciones tiene la responsabilidad de garantizar que los procesos electorales se realicen de manera transparente, segura, accesible y confiable. En ese sentido, resulta conveniente promover que los estudiantes de nivel superior reciban orientación sobre estos procesos y cuenten con información clara que les permita comprender su participación como futuros electores.

Por tanto, es necesario evaluar el proceso mediante el cual se orienta y enseña a los estudiantes sobre el sistema electoral en las escuelas públicas de nivel superior, con el propósito de identificar las prácticas existentes, las áreas que puedan fortalecerse y las alternativas que permitan mejorar la educación electoral de los jóvenes en Puerto Rico.

Esta investigación permitirá conocer el alcance de la orientación que reciben los estudiantes y evaluar la posibilidad de fortalecer los mecanismos educativos relacionados con el proceso electoral. Asimismo, permitirá identificar alternativas para que los jóvenes cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios para ejercer su derecho al voto de forma responsable e informada y participar activamente en el proceso democrático de Puerto Rico.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico *a* realizar una investigación exhaustiva ~~acerca del curso~~ *sobre la enseñanza* del proceso electoral en las escuelas públicas de nivel superior.

Sección 2.- La Comisión, sin que esto resulte como una limitación, investigará con especial énfasis lo siguiente:

(a) ~~investigará si existe~~ *la disponibilidad de* un curso o programa dirigido a enseñar a los estudiantes de escuela pública de nivel superior sobre el proceso electoral y su funcionamiento.

(b) ~~investigará~~ la ~~existencia~~*disponibilidad*, vigencia y uso del Módulo Didáctico de Estudios Sociales de nivel superior, identificado como ESSO 131-1632, "Educación en Procesos Electorales y Parlamentarios", incluido en el Catálogo General de Cursos (2023-2027) del Departamento de Educación.

(c) ~~investigará~~ la forma en que el módulo *mencionado en el inciso anterior* se implementa en las escuelas públicas de nivel superior, incluyendo los recursos educativos utilizados, el personal encargado de impartirlo y la cantidad de estudiantes que participan del mismo.

(d) ~~investigará~~ el contenido, *el* alcance y *la* forma en que se ofrece la enseñanza sobre el proceso electoral a los estudiantes, incluyendo los temas que se cubren y los recursos utilizados para su orientación.

(e) ~~investigará~~ si la Comisión Estatal de Elecciones y el Departamento de Educación participan *de manera coordinada* en la orientación de los estudiantes sobre el proceso electoral.

(f) ~~investigará~~ si los estudiantes reciben información sobre el proceso de inscripción electoral, los requisitos para votar, los derechos y responsabilidades de los electores y los pasos para ejercer el voto.

(g) ~~investigará~~ las alternativas existentes para fortalecer la educación sobre el proceso electoral en las escuelas públicas de nivel superior y promover una participación electoral informada y responsable entre los jóvenes.

Sección 3.- La Comisión rendirá un informe final con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de los noventa (90) días desde la aprobación de la Resolución.

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación.

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea Legislativa — 4ta. Sesión Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 1110

INFORME POSITIVO

7 de octubre de 2026

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR
RECIBIDO OCT 7'26 PM 1:49

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 1110 recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, con las enmiendas introducidas en el entirillado electrónico que le acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 1110 (en adelante, P. de la C. 1110), tiene como propósito propone declarar y reconocer que el primer domingo del mes de noviembre de cada año será conocido como el "Día de la Movilidad Asistida", con el propósito de crear conciencia y propiciar el auto desempeño y el bienestar de las personas con discapacidad y/o que presenten lesiones que requieran la utilización de equipos de asistencia para lograr su movilidad.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La medida propone declarar el primer domingo del mes de noviembre de cada año como el "Día de la Movilidad Asistida", con el propósito de crear conciencia sobre la importancia de los equipos de asistencia para las personas con discapacidad o con lesiones que afectan su movilidad.

La Exposición de Motivos destaca que estos equipos constituyen herramientas esenciales para fomentar la independencia, la participación social y una mejor calidad de vida. Entre ellos se incluyen bastones, muletas, andadores, sillas de ruedas, vehículos adaptados y otros dispositivos que permiten atender distintas necesidades de movilidad.

Asimismo, la medida procura promover la orientación ciudadana sobre la selección, uso y mantenimiento adecuado de estos equipos, así como divulgar los servicios y derechos disponibles para las personas que los utilizan. De igual forma, reconoce la labor de las entidades públicas, privadas y sin fines de lucro que contribuyen a fomentar la accesibilidad, la autonomía y la inclusión de esta población.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. de la C. 1110, evaluó los memoriales explicativos que la Cámara de Representantes recibió: Departamento de la Familia, Departamento de Estado, Departamento de Educación y Defensoría de las Personas con Impedimento.

A continuación, se expone lo expresado por las entidades que comparecieron por escrito.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

El Departamento de Educación de Puerto Rico reconoció la importancia de visibilizar y crear conciencia sobre el uso adecuado de equipos de movilidad asistida y otras tecnologías de apoyo, al entender que estos recursos contribuyen a promover mayores niveles de independencia, participación y calidad de vida para las personas con discapacidad.

Asimismo, destacó que, en el ámbito educativo, el Programa de Educación Especial evalúa y determina la necesidad de equipos de asistencia tecnológica como parte del Programa Educativo Individualizado, y que el Departamento mantiene iniciativas de orientación y capacitación dirigidas a estudiantes, familias y personal escolar sobre el uso adecuado de estos equipos.

El Departamento reafirmó su compromiso con la promoción de la autonomía, la accesibilidad y la inclusión plena de los estudiantes con discapacidad, y consideró que la medida puede servir como un mecanismo adicional de concienciación sobre la importancia de la movilidad asistida y la asistencia tecnológica. Por esto, favoreció la aprobación del P. de la C. 1110, sujeto a que su implementación no genere obligaciones fiscales adicionales no presupuestadas, se armonice con la planificación académica y el calendario escolar, y se lleve a cabo utilizando los recursos existentes.

DEPARTAMENTO DE ESTADO

El Departamento de Estado expresó que el P. de la C. 1110 es consistente con la política pública vigente sobre inclusión y accesibilidad, al reconocer la importancia de los equipos de movilidad asistida para fomentar la independencia funcional, la participación social y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Asimismo, destacó que la medida tiene un carácter principalmente educativo y declarativo, por lo que su efectividad dependerá de una adecuada coordinación

interagencial y de la colaboración con organizaciones sin fines de lucro, entidades privadas y profesionales de la salud. A esos fines, recomendó establecer responsabilidades claras entre las agencias concernidas y considerar recursos mínimos para materiales educativos y esfuerzos de divulgación.

Finalmente, el Departamento favoreció la aprobación de la medida, al entender que la conmemoración propuesta puede contribuir a fortalecer la concienciación ciudadana, la inclusión y la autosuficiencia de las personas que dependen de equipos de movilidad asistida.

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

El Departamento de la Familia expresó su respaldo al propósito del P. de la C. 1110, al reconocer la importancia social y humana de promover la inclusión, autonomía, seguridad y calidad de vida de las personas con discapacidad. Asimismo, destacó que la movilidad asistida constituye un elemento esencial para facilitar el acceso a servicios de salud, educación, empleo y participación comunitaria.

El Departamento señaló que el reconocimiento del "Día de la Movilidad Asistida" puede servir como una herramienta para visibilizar las necesidades de esta población y promover iniciativas educativas sobre el uso adecuado de equipos de asistencia. No obstante, enfatizó que la movilidad asistida también requiere atender la accesibilidad física de los espacios públicos y privados, incluyendo aceras, rampas e infraestructura adecuada.

Finalmente, favoreció el propósito de la medida y recomendó que su implantación incorpore esfuerzos coordinados para fortalecer la accesibilidad física y estructural, así como iniciativas de educación pública, capacitación y coordinación interagencial dirigidas a fomentar una sociedad más inclusiva y accesible.

DEFENSORIA DE PERSONAS CON IMPEDIMENTOS

La Defensoría de las Personas con Impedimentos expresó su total apoyo al P. de la C. 1110, al entender que la declaración del "Día de la Movilidad Asistida" contribuirá a fortalecer los esfuerzos de concienciación, educación e inclusión de las personas con impedimentos.

La DPI destacó que, a pesar de los avances alcanzados en materia de accesibilidad e igualdad, aún persisten barreras físicas y de actitud, particularmente por desconocimiento sobre las condiciones que generan impedimentos y los derechos que protegen a esta población. En ese contexto, sostuvo que la medida puede servir como base para promover campañas educativas sobre el uso y mantenimiento adecuado de los equipos de movilidad asistida.

Asimismo, recomendó sustituir en el texto de la medida las referencias al término "discapacidad" por "persona con impedimentos" o "impedimento", conforme al lenguaje institucional utilizado por la agencia. Finalmente, indicó que sería deseable contar con recursos presupuestarios que permitan desarrollar foros,

charlas y actividades educativas sin afectar los recursos existentes, y reiteró su endoso a la aprobación de la medida.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107–2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión Informante certifica que la medida ante nuestra consideración no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico efectuó un análisis minucioso del P. de la C. 1110, según fue referido, así como de los memoriales explicativos sometidos por el Departamento de Educación, el Departamento de Estado, el Departamento de la Familia y la Defensoría de las Personas con Impedimentos.

La Comisión de Gobierno coincide en que la declaración del primer domingo del mes de noviembre de cada año como el "Día de la Movilidad Asistida" constituye una iniciativa meritoria para promover la concienciación sobre la importancia de los equipos de asistencia, la accesibilidad y la inclusión de las personas que requieren apoyo para su movilidad. Asimismo, entiende que la medida puede servir como instrumento educativo para fomentar la autonomía, la participación social y el bienestar de esta población.

De igual forma, la Comisión reconoce la importancia de que la implantación de la medida se lleve a cabo mediante una adecuada coordinación interagencial, utilizando los recursos disponibles y promoviendo esfuerzos de orientación y educación pública que permitan cumplir efectivamente con los propósitos de la legislación.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. de la C. 1110 con las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico que le acompaña.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno
Senado de Puerto Rico

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO
(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(21 DE MAYO DE 2026)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea Legislativa — 3ra. Sesión Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1110

5 DE FEBRERO DE 2026

Presentado por la representante *Medina Calderón*

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY

Para declarar ~~y reconocer que~~ el primer domingo del mes de noviembre de cada año ~~será conocido~~ como el "Día de la Movilidad Asistida", con el propósito de crear conciencia y propiciar ~~el auto-desempeño~~ *la autonomía* y el bienestar de las personas con ~~discapacidad y/o que presenten~~ *impedimentos y personas con* lesiones que requieran ~~utilizar la asistencia de equipos para lograr obtener~~ *el uso de equipos de asistencia para* su movilidad; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En Puerto Rico existen muchos ciudadanos que tienen ~~alguna discapacidad desde su nacimiento, desarrollada durante su crecimiento o que lamentablemente han sufrido lesiones que imposibilitan su traslado, y tienen~~ *algún impedimento desde su nacimiento, que lo desarrollan durante su crecimiento o que han sufrido lesiones que limitan su movilidad. Estas personas tienen* el derecho de lograr su independencia de movimiento mediante la ayuda o asistencia tecnológica. Estos equipos de asistencia ~~logran y permiten a estos ciudadanos poder~~ *les permiten* estudiar, ~~conseguir y desempeñarse en un trabajo, para llevar a cabo su vida plena, independiente, y lograr mejorar~~ *obtener y desempeñar un empleo, llevar una vida plena e independiente y mejorar su* calidad de vida.

El Artículo 2 de la Ley 51-1996, según enmendada, conocida como "Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos", define "asistencia tecnológica" como: "todo aquel equipo y servicio indispensable a ser utilizado por las personas con impedimentos con el propósito de aumentar, mantener o mejorar sus capacidades funcionales, incluyendo intérpretes, anotadores y lectores, cuando esté recomendado en el programa individualizado de servicios." Además, en ese mismo Artículo, se define "impedimentos" como: "cualquier condición física, mental o emocional que limite o interfiera con el desarrollo o la capacidad de aprendizaje de la persona."

Estos equipos de asistencia deben ser cuidados y ~~conservar~~ *conservados* en buen estado, por lo tanto, es necesario obtener la orientación adecuada sobre ~~cómo deben ser utilizados~~ *su uso y mantenimiento*. Tomando en consideración las distintas condiciones y necesidades ~~especiales de las personas con discapacidades, sabemos que~~ *de las personas con impedimentos,* los equipos y cuidados ~~son~~ *pueden ser* diversos, y en ocasiones complejos y costosos.

Estos equipos ~~le~~ permiten *a las personas* caminar o moverse de un lugar a otro. Entre ellos ~~podemos destacar~~ *se encuentran* muletas, bastones, andadores, sillas de ruedas, triciclos motorizados, ~~autos~~ *vehículos* adaptados, entre otros.

~~Hay que saber escoger que equipo de movilidad asistida es el adecuado, ya que las discapacidades es un asunto que debe atenderse, diligentemente para beneficio de quienes las padecen. Es de suma importante obtener orientación necesaria para poder hacer la selección del equipo que mejor se adapte a las necesidades de la persona, ya que de no serlo existe un alto riesgo de provocarle un daño mayor.~~*La selección adecuada de un equipo de movilidad asistida requiere orientación y evaluación conforme a las necesidades particulares de cada persona. Resulta de suma importancia escoger el equipo que mejor se adapte a dichas necesidades, toda vez que una selección inadecuada podría afectar su seguridad, funcionalidad o bienestar.*

~~Con esta Ley se logra que más personas se unan para dar paso a un día especial y creen conciencia y se comprometan con la causa. De esta manera logramos el reconocimiento y la importancia que tienen estos equipos mecánicos para lograr la movilidad asistida.~~ *Mediante esta Ley se procura fomentar una mayor concienciación ciudadana sobre la importancia de la movilidad asistida y promover el compromiso colectivo con las necesidades de las personas que utilizan estos equipos.*

Como sociedad ~~es nuestro deber asumir un compromiso tomando acciones afirmativas para concienciar cuál es~~ *, tenemos el deber de promover acciones dirigidas a concienciar sobre* la importancia de estos equipos en la independencia y autosuficiencia de ~~aquellos~~ *las personas* que así lo necesitan, ~~y~~ *así como* divulgar los servicios disponibles y los derechos que les asisten. Al conmemorar el "Día de la Movilidad Asistida" en Puerto

Rico se destaca, entre otras cosas, la valiosa labor de las diversas entidades públicas y privadas, y sin fines de lucro, que inciden en la concienciación de la ciudadanía sobre la importancia que tienen los equipos de movilidad para las personas que así lo necesitan.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Se declara ~~y reconoce que~~ el primer domingo del mes de noviembre de cada año ~~será conocido~~ como el "Día de la Movilidad Asistida", con el propósito de crear conciencia y propiciar ~~el auto desempeño~~ *la autonomía* y el bienestar de las personas con ~~discapacidad y/o que presenten~~ *impedimentos y personas con* lesiones que requieran ~~utilizar la asistencia de equipos para lograr obtener su movilidad~~ *el uso de equipos de asistencia para su movilidad*.

Artículo 2.-El Departamento de Estado, en conjunto con el Departamento de Educación y otras agencias concernidas, adoptarán las iniciativas que sean necesarias para dar fiel cumplimiento a los propósitos de esta Ley; teniendo presente la coordinación de actividades para la orientación ciudadana sobre la importancia del uso correcto de los equipos de movilidad asistida, y los ofrecimientos de servicios de mantenimiento para estos equipos.

Artículo 3. – La Gobernadora o el Gobernador del Gobierno de Puerto Rico emitirá la proclama con al menos diez (10) días de anticipación. Copia de la proclama será distribuida a los medios de comunicación para su publicación.

Artículo 4. - Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

ORIGINAL

RECIBIDO OCT 7'26 AM 9:42
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea Legislativa — 4ta. Sesión Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 1271

INFORME POSITIVO

7 de octubre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 1271, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 1271 (en adelante, P. de la C. 1271), tiene como propósito derogar la Ley Núm. 80 del 1 de mayo de 1941, y otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Ley Núm. 80 del 1 de mayo de 1941 establece que los funcionarios conocidos en la actualidad como Secretario de Transportación y Obras Públicas, y Secretario de Agricultura deberán implementar un plan de forestación con árboles frutales en las áreas aledañas a las carreteras por los litorales y el interior de Puerto Rico, con especies autóctonas y extranjeras. Esto considerando tanto aspectos nutritivos como ornamentales, para estos fines se otorga una asignación presupuestaria de tres mil dólares (3,000.00), con el propósito de establecer un vivero de árboles, y dar cumplimiento al mandado de ley.

El P. de la C. 1271 pretende derogar la Ley Núm. 80 del 1 de mayo de 1941. Fundamenta su intención en que el estilo de vida y las carreteras se han transformado significativamente en los últimos ochenta y cinco (85) años. A su vez, señala que la cuantía de tres mil dólares ($3,000.00) resulta insuficiente para cumplir con el propósito por ley. De la misma manera, las mejores prácticas para la construcción, mantenimiento y conservación de las carreteras, tanto a nivel de Puerto Rico como de

los Estados Unidos, se apartan de promover la siembra de árboles frutales en las áreas aledañas a las carreteras por los litorales, el interior y las vías principales de Puerto Rico considerando aspectos relacionados a la seguridad vial.

Es en vista de la transformación y evolución social, reglamentaria, así como la depuración y simplificación del ordenamiento jurídico que se entiende adecuada la derogación de la Ley Núm. 80 de 1 de mayo de 1941. Finalmente se desprende de la exposición de motivos de la medida propuesta que ante la realidad actual resulta obsoleta e inoficiosa.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. de la C. 1271, solicitó memoriales explicativos a las siguientes agencias y entidades: Oficina de Servicios Legislativos, Departamento de Transportación y Obras Públicas, Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa y el Departamento de Agricultura. A continuación, se expone lo expresado por las entidades que comparecieron por escrito.

OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

La Oficina de Servicios Legislativos (OSL) expone argumentos que favorecen la aprobación de P. de la C. 1271 y destaca que entre las funciones inherentes de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico se encuentran aprobar, enmendar y derogar leyes. A su vez, expresan que, en nuestro ordenamiento jurídico, como sucede en otras jurisdicciones, las leyes se exponen a que con el paso de los años pierdan, en parte o en todo, su efectividad debido al constante cambio de la sociedad. Los estatutos y el derecho vigente deben atemperarse a las necesidades sociales, económicas y culturales de determinado tiempo.

Entonces, la OSL considera que tal como se expresa en la exposición de motivos de la medida propuesta, la realidad vial, económica y social de la Isla ha cambiado drásticamente desde la aprobación de la Ley Núm. 80 del 1 de mayo de 1941 hace más de ocho (8) décadas. Por otro lado, la OSL opina que la legislación y procesos regulatorios que rigen la materia de las carreteras en Puerto Rico, deberían ser congruentes con las mejores prácticas y el uso óptimo de sus recursos. Finalmente, la OSL razona que este proyecto persigue reforzar la eficacia de los estatutos y la gestión gubernamental en atención al mejor uso de las carreteras.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) avala esta pieza legislativa. Expresa en su memorial que reconoce la loable intención del legislador de promover la política pública dirigida a eliminar regulaciones obsoletas, que han perdido vigencia y que simultáneamente interfieren con las leyes federales y estatales

vigentes encaminadas a promover y garantizar la seguridad vial en las carreteras y la protección de los ciudadanos que transitan por ella.

Al DTOP le corresponde la administración y protección del derecho de vía de las carreteras estatales. Estas poseen distintas clasificaciones, muchas de las cuales pertenecen al programa de National Highway System (NHS), sistema que agrupa aquellas que reciben fondos federales para su desarrollo y mantenimiento. En este tipo de vías, las intervenciones dentro del derecho están sujetas a estrictos criterios de seguridad vial establecidos por la Federal Highway Administration (FHWA) y la American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), particularmente aquellos contenidos en el Roadside Design Guide.

Estas guías consideran los árboles como objetos fijos dentro del entorno lateral de la carretera, por lo que su ubicación debe evaluarse con especial cautela, dado que los objetos rígidos localizados cerca de la calzada pueden aumentar la gravedad de las colisiones en caso de que un vehículo se desvíe de su carril. El espacio contiguo a la calzada debe mantenerse libre de objetos rígidos para permitir la recuperación segura de un vehículo. Adicionalmente, el sistema radicular de los árboles puede ocasionar daños a los carriles, la tubería de desagüe pluvial y otras utilidades ubicadas dentro de las servidumbres.

El DTOP concluye considerando tanto los criterios de seguridad vial como los procesos de planificación en curso, cualquier iniciativa de forestación es contraria a las mejores prácticas para la construcción, mantenimiento y conservación de las carreteras a nivel de Puerto Rico y de los Estados Unidos. De esta manera, el departamento fundamenta su decisión de apoyar el P. de la C. 1271, derogando así la Ley Núm. 80 en aras a salvaguardar la seguridad y la operación del sistema vial.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

La oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) indica que la medida propuesta no tiene impacto fiscal. Luego de hacer un detallado análisis de la Ley Núm. 80 del 1 de mayo de 1941, OPAL evaluó las asignaciones consignadas en la Sabana Presupuestaria del Fondo General correspondientes a las agencias concernidas. No identificó partidas presupuestarias específicas designadas a la ejecución de las disposiciones establecidas en la Ley Núm. 80-1941, ni evidencia de que la asignación originalmente autorizada continúe vigente o se refleje de forma separada en el presupuesto actual.

Finalizan sus comentarios reiterando que, de ser aprobado, el P. de la C. 1271 no tendría impacto fiscal sobre el erario ni sus instrumentalidades, ya que sus disposiciones se limitan a derogar la Ley Núm. 80 del 1 de mayo de 1941. Esto resultaría en retirar la obligación legal del DTOP y el Departamento de Agricultura de coordinar la siembra, protección y conservación de árboles frutales en las carreteras de Puerto Rico. Considerando que el programa no se encuentra en operación y que la asignación de $3,000 contemplada en la Ley no se identifica actualmente de manera separada con cargo al Fondo General, la medida tendría como efecto principal la

supresión formal de dichas facultades y responsabilidades estatutarias. Sin embargo, el DTOP mantendría facultades inherentes para conservar las carreteras públicas y promover la siembra de árboles a lo largo de estas.

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

El Departamento de Agricultura (DA) respalda la aprobación del P. de la C. 1271, posición que también demostraron ante la Asamblea Legislativa durante la evaluación de la Resolución de la Cámara 455. Sostienen que hay varias situaciones que imposibilitan la implementación de esta Ley actualmente. Comienzan mencionando que, por recomendación del Gobierno Federal, no se siembran árboles frutales en estos lugares porque contribuirían a la diseminación la mosca frutera. En Estados Unidos y Puerto Rico, el Gobierno Federal, específicamente a través del USDA (Departamento de Agricultura de EE. UU.) y su agencia APHIS, mantienen regulaciones estrictas para el control de la mosca de la fruta. Aunque no operan como una "prohibición de siembra" generalizada, sino como una serie de protocolos de manejo y cuarentena.

Exponen que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), a través del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), regula este tema bajo el Código de Reglamentos Federales (CFR). Por otro lado, la normativa estatal complementa las leyes federales con leyes locales que regulan la siembra en vías públicas y el control de plagas. Incluso la Ley Núm. 93 de 1973, mejor conocida como la Ley de Sanidad Vegetal de Puerto Rico faculta al Departamento de Agricultura local para declarar cuarentenas internas y ordenar la destrucción de plantas o frutos que alberguen la mosca de la fruta u otras plagas.

El DA cierra sus expresiones sobre la medida propuesta aclarando que no cuenta con viveros para el desarrollo de estos árboles. El monto de tres mil dólares ($3,000.00) actualmente no es un presupuesto razonable para poder implementar el programa de siembras que la Ley Núm. 80 del 1 de mayo de 1941 establece. Sin embargo, recomiendan pueda establecerse un plan piloto de reforestación a través del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de árboles nativos para los cuales esta agencia posee viveros en donde se producen los mismos, tomando en consideración que sean especies de altura media para que no conflijan con el tendido eléctrico. Independientemente, reiteran su apoyo al P. de la C. 1271.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107–2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión Informante certifica que la medida ante nuestra consideración no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico efectuó un análisis minucioso del P. de la C. 1271, según fue referido, junto a los comentarios de la Oficina de Servicios Legislativos, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa y el Departamento de Agricultura.

La Comisión de Gobierno entiende que la intención que persigue la medida es necesaria. En síntesis, el P. de la C. 1271 busca eliminar las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 80 del 1 de mayo de 1941, dejando sin efecto el marco legal que autoriza y asigna al DTOP y al Departamento de Agricultura el desarrollo y mantenimiento de un programa de siembra de árboles frutales en las carreteras de Puerto Rico. Todas las agencias que comparecieron ante esta Comisión coinciden en que la realidad actual ha cambiado de tal manera que la Ley ya no responde a las necesidades de este tiempo, más bien, impone obstáculos a las mejores prácticas para la construcción, mantenimiento y conservación de las carreteras a nivel de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Ha quedado meridianamente claro que la medida propuesta busca reforzar la eficacia de los estatutos y la gestión gubernamental en atención al mejor uso de las carreteras.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el **Proyecto de la Cámara 1271,** recomendando su aprobación sin enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno
Senado de Puerto Rico

(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(18 DE JUNIO DE 2026)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea Legislativa

3ra. Sesión Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1271

11 DE MAYO DE 2025

Presentado por el representante *Morey Noble*

Referido a la Comisión de Reorganización, Eficiencia y Diligencia

LEY

Para derogar la Ley Núm. 80 del 1 de mayo de 1941, y otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Núm. 80 del 1 de mayo de 1941[1] establece que los funcionarios conocidos en la actualidad como Secretario de Transportación y Obras Públicas, y Secretario de Agricultura deberán implementar un plan de forestación con árboles frutales en las áreas aledañas a las carreteras por los litorales y el interior de Puerto Rico, con especies autóctonas y extranjeras.[2] Ello considerando tanto aspectos nutritivos como ornamentales.[3] Para ello, se otorga una asignación presupuestaria de tres mil dólares ($3,000.00), con el propósito de establecer un vivero de árboles, y dar cumplimiento al mandato de ley.[4]

Tanto la realidad vial como social de Puerto Rico se han transformado enormemente, con carreteras más amplias y extensas, y estilo de vida que no es igual al de hace aproximadamente ochenta y cinco (85) años. De igual modo, la cuantía de tres mil dólares ($3,000.00) resulta insuficiente para cumplir con el propósito de la ley.

---

1 Ley Núm. 80 del 1 de mayo de 1941, 1941 LPR págs. 677-678.
2 *Íd.*, sec. 1.
3 *Íd.*
4 *Íd.*, sec. 3.

Asimismo, las mejores prácticas para la construcción, mantenimiento y conservación de las carreteras, tanto a nivel de Puerto Rico como de los Estados Unidos, se apartan de promover la siembra de árboles frutales en las áreas aledañas a las carreteras por los litorales, el interior y las vías principales de Puerto Rico considerando aspectos relacionados a la seguridad vial.

Es en atención a la transformación y evolución social, reglamentaria y de la construcción y mantenimiento en materia de carreteras, así como la depuración y simplificación de nuestro ordenamiento jurídico, que consideramos apropiada la derogación de la Ley Núm. 80 del 1 de mayo de 1941[5]. Ante la realidad actual la misma resulta obsoleta e inoficiosa.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se deroga la Ley Núm. 80 del 1 de mayo de 1941.

Artículo 2.- Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

---

5 Ley Núm. 80 del 1 de mayo de 1941, *supra*.

ORIGINAL

RECIBIDO OCT 6'26 PM 3:42
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma Asamblea Legislativa

4ta Sesión Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R.C. de la C. 254

INFORME POSITIVO

6 de octubre
~~_ de septiembre~~ de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la R.C. de la C. 254, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta de la Cámara 254, (en adelante, "R.C. de la C. 254"), según radicada, tiene como propósito reasignar a la Oficina de Obras Públicas del Municipio de Bayamón, la cantidad de setenta y cuatro mil dólares ($74,000), provenientes de la R.C. Núm. 18-2005, Sección 1, cinco mil dólares ($5,000); R.C. Núm. 108-2009, Sección 1, Apartado 13, Inciso d, cuatro mil doscientos dólares ($4,200); R.C. Núm. 153-2009, Sección 1, Apartado A, mil setecientos dólares ($1,700); R.C. Núm. 233-2009, Sección 1, Apartado A, mil dólares ($1,000); R.C. Núm. 140-2010, Sección 1, cuatro mil dólares ($4,000); R.C. Núm. 145-2011, Sección 1, Apartado A, Inciso 2, mil seiscientos sesenta y cuatro dólares ($1,664); R.C. Núm. 6-2012, Sección 1, diez mil quinientos ocho dólares con ochenta centavos ($10,508.80); R.C. Núm. 161-2012, Sección 1, Apartado A, Inciso 2, mil dólares ($1,000); R.C. Núm. 187-2012, Sección 1, Apartado A, Inciso 3, dos mil dólares ($2,000); R.C. Núm. 110-2016, Sección 1, quince mil novecientos veintisiete dólares con veinte centavos ($15,927.20); R.C. Núm. 18-2017, Sección 1, Apartado 16, Incisos c y d, veintisiete mil dólares ($27,000); para ser utilizados según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar el pago de los fondos reasignados; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta de la Cámara 254 dispone la reasignación de sobrantes en fondos provenientes de varias Resoluciones Conjuntas previamente aprobadas. Estos recursos habían sido consignados originalmente para obras en el Distrito Representativo Número 7 de Bayamón.

La Resolución Conjunta tiene el propósito de autorizar la reasignación de dichos fondos a la Oficina de Obras Públicas del Municipio de Bayamón, para que se utilicen en obras y mejoras permanentes dentro de su jurisdicción. Según se expone, reasignar de estas partidas permitirá atender necesidades apremiantes de infraestructura y conservación, y garantizar a la ciudadanía instalaciones dignas y adecuadas para la conmemoración y el descanso de sus seres queridos. Entre las que se encuentran las obras y mejoras permanentes en el Parque Robert Junghanns, localizado en la intersección de las carreteras PR-2 y PR-167.

La Asamblea Legislativa reconoce el rol del Municipio en la prestación de servicios a su población y en la promoción del desarrollo urbano y social. Por ello, estima meritoria la reasignación propuesta, como medida para asegurar el uso responsable y eficiente de fondos públicos.

MUNICIPIO DE BAYAMÓN

La Oficina de Finanzas del Municipio de Bayamón certificó la existencia de sobrantes de fondos provenientes de diversas Resoluciones Conjuntas. El Municipio de Bayamón expresó que los fondos reasignados serán destinados a la realización de mejoras permanentes en infraestructura y conservación, garantizando a la ciudadanía instalaciones dignas y adecuadas. Esta iniciativa responde a la necesidad de fortalecer los servicios que se ofrecen a la ciudadanía mediante la optimización de espacios y estructuras bajo la jurisdicción del municipio.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como el "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado certifica que la Resolución Conjunta de la Cámara 254 no representa una carga fiscal adicional para los presupuestos municipales, toda vez que la

medida se limita a disponer la reasignación de fondos previamente asignados, sin requerir asignaciones nuevas ni comprometer recursos adicionales.

CONCLUSIÓN

Luego de un análisis detallado del contenido y los fines de la presente Resolución Conjunta, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA emite un informe positivo y recomienda su aprobación, al reconocer que la medida responde a la necesidad de atender prioridades de infraestructura municipal garantizando a la ciudadanía instalaciones dignas y adecuadas para la conmemoración y el descanso de sus seres queridos mediante el uso eficiente de recursos previamente asignados.

Asimismo, se hace constar que los beneficiarios de las asignaciones dispuestas en esta medida estarán sujetos al cumplimiento de las disposiciones de la Ley Núm. 179-2002, conocida como la Ley para Reglamentar el Proceso de Asignaciones Legislativas. Dicha ley establece los parámetros de transparencia, rendición de cuentas y uso responsable de fondos públicos, incluyendo la obligación de presentar informes detallados y evidencia del uso adecuado de los recursos asignados mediante legislación.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del R.C. de la C. 254, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Migdalia Padilla

Hon. Migdalia Padilla Alvelo
Presidenta
Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA

(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(14 DE SEPTIEMBRE DE 2026)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea Legislativa — 3ra. Sesión Ordinaria

CAMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 254

17 DE DICIEMBRE DE 2025

Presentada por el representante *Pérez Ortiz*

Referida a la Comisión de Hacienda

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para reasignar a la Oficina de Obras Públicas del Municipio de Bayamón, la cantidad setenta y cuatro mil dólares ($74,000), provenientes de la R.C. Núm. 18-2005, Sección 1, cinco mil dólares ($5,000); R.C. Núm. 108-2009, Sección 1, Apartado 13, Inciso d cuatro mil doscientos dólares ($4,200); R.C. Núm. 153-2009, Sección 1, Apartado A, mil setecientos dólares ($1,700); R.C. Núm. 233-2009, Sección 1, Apartado A, mil dólares ($1,000); R.C. Núm. 140-2010, Sección 1, cuatro mil dólares ($4,000); R.C. Núm. 145-2011, Sección 1, Apartado A, Inciso 2, mil seiscientos sesenta y cuatro dólares ($1,664); R.C. Núm. 6-2012, Sección 1, diez mil quinientos ocho dólares con ochenta centavos ($10,508.80); R.C. Núm. 161-2012, Sección 1, Apartado A, Inciso 2, mil dólares ($1,000); R.C. Núm. 187-2012, Sección 1, Apartado A, Inciso 3, dos mil dólares ($2,000); R.C. Núm. 110-2016, Sección 1, quince mil novecientos veintisiete dólares con veinte centavos ($15,927.20) R.C. Núm. 18-2017, Sección 1, Apartado 16, Incisos c y d veintisiete mil dólares ($27,000); para ser utilizados según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para autorizar el pago de los fondos reasignados; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Oficina de Finanzas del Municipio de Bayamón certificó la existencia de sobrantes de fondos provenientes de diversas Resoluciones Conjuntas previamente

aprobadas. Dichos fondos habían sido consignados originalmente para la realización de obras en el Distrito Representativo Número 7 de Bayamón.

Esta Resolución Conjunta tiene como propósito autorizar la reasignación de dichos recursos a favor del Municipio de Bayamón, con el fin de destinarlos a la ejecución de obras y mejoras permanentes en dicho municipio. La optimización de estas partidas permitirá atender necesidades apremiantes de infraestructura y conservación, garantizando a la ciudadanía instalaciones dignas y adecuadas para la conmemoración y el descanso de sus seres queridos.

La Asamblea Legislativa reconoce el valioso rol que desempeña el Municipio de Bayamón en la prestación de servicios a su población y en la promoción del desarrollo urbano y social. En virtud de ello, entiende meritorio viabilizar la reasignación de fondos descrita en esta medida, de manera que se asegure el uso responsable y eficiente de los recursos públicos.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se reasigna a la Oficina de Obras Públicas del Municipio de Bayamón, la cantidad setenta y cuatro mil dólares ($74,000); provenientes de la R.C. Núm. 18-2005, Sección 1, cinco mil dólares ($5,000); R.C. Núm. 108-2009, Sección 1, Apartado 13, Inciso d cuatro mil doscientos dólares ($4,200); R.C. Núm. 153-2009, Sección 1, Apartado A, mil setecientos dólares ($1,700); R.C. Núm. 233-2009, Sección 1, Apartado A, mil dólares ($1,000); R.C. Núm. 140-2010, Sección 1, cuatro mil dólares ($4,000); R.C. Núm. 145-2011, Sección 1, Apartado A, Inciso 2, mil seiscientos sesenta y cuatro dólares ($1,664); R.C. Núm. 6-2012, Sección 1, diez mil quinientos ocho dólares con ochenta centavos ($10,508.80); R.C. Núm. 161-2012, Sección 1, Apartado A, Inciso 2, mil dólares ($1,000); R.C. Núm. 187-2012, Sección 1, Apartado A, Inciso 3, dos mil dólares ($2,000); R.C. Núm. 110-2016, Sección 1, quince mil novecientos veintisiete dólares con veinte centavos ($15,927.20); R.C. Núm. 18-2017, Sección 1, Apartado 16, Incisos c y d

veintisiete mil dólares ($27,000); los cuales serán utilizados como se desglosa a continuación:

1.	**Municipio de Bayamón**	
	Oficina de Obras Públicas	
	a. Transferir para obras y mejoras permanentes en el Parque Robert Junghanns, localizado en la intersección de las carreteras #2 y #167.	$74,000
	Total	**$74,000**

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, estatales o municipales.

Sección 3.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados, así como cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de Puerto Rico, para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta.

Sección 4.-Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas deberán cumplir con las disposiciones de la Ley 179-2002.

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

ORIGINAL

RECIBIDO JUN25'26PM7:18
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea Legislativa

3ra. Sesión Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de la C. 326

INFORME POSITIVO

25 de junio de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación de la R. C. de la C. 326, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. de la C. 326 tiene como propósito *"...ordenar a la Autoridad de Tierras y a la Junta de Planificación de Puerto Rico, a liberar de las restricciones y condiciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas, según dispuesto en la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, del predio de terreno marcado con el número Diez (10) en el Plano de Subdivisión de la finca "Vega Redonda", según consta en la Escritura Número Treinta y Tres (33), otorgada en San Juan, Puerto Rico, el 24 de junio de 1981 ante el Notario Público Rafael Pérez Fussa, sobre la Finca Número Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve (6,659) inscrita al Folio Número Doscientos Ochenta y Cuatro (284) Tomo Noventa y Tres (93) de Comerío, en el Registro de la Propiedad de Barranquitas, Inscripción Primera e inscrita a favor de Don Pedro Reyes Alicea y Doña Jesusa Ríos Ortiz, ambos fallecidos; y para otros fines relacionados"*.

De entrada, es menester señalar la importancia que reviste a la resolución conjunta de autos. Estimamos que la Exposición de Motivos de la medida, explica por sí misma lo imperativo de aprobarse, al decirnos que

> [l]a Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, se creó para salvaguardar el destino y uso agrícola de las fincas del Programa de Fincas de Tipo Familiar, conocido como "Título VI de la Ley de Tierras". El Secretario de Agricultura fue facultado para la disposición de terrenos de uso agrícola mediante la cesión, venta, arrendamiento o donaciones. La venta de estas fincas bajo el referido Programa se

realizaba con una serie de condiciones y restricciones que formaban parte del acuerdo de compraventa.

El 24 de junio de 1981, le fue otorgada al matrimonio Reyes Ríos la titularidad del predio de terreno objeto de esta Resolución Conjunta bajo el Programa de Fincas Familiares, con las respectivas restricciones establecidas en la referida Ley Núm. 107. Las condiciones y restricciones se encuentran redactadas en la Escritura Número 33, otorgada en San Juan, Puerto Rico, el 24 de junio de 1981, ante el Notario Público Rafael Pérez Fussa, sobre la Finca Número Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve (6,659) inscrita al Folio Doscientos Ochenta y Cuatro (284) del Tomo Noventa y Tres (93) de Comerío, en el Registro de la Propiedad de Barranquitas, Inscripción Primera.

En su origen, la finalidad del Programa de Fincas de Tipo Familiar era promover la agricultura en pequeños predios. No obstante, a lo largo de más de cinco décadas de cambios sociales, económicos y demográficos en nuestra Isla, la realidad es que los hijos de aquellos primeros beneficiarios del Programa necesitaron un lugar donde vivir y desarrollarse en momentos de un gran auge poblacional. Por ello, fueron ampliando el entorno a través del establecimiento de comunidades en dichas tierras. Hoy en día, transcurrido el tiempo en que muchas de aquellas fincas dejaran de tener un fin prioritariamente agrícola, es necesario atemperar esa realidad en el Registro de la Propiedad, en los casos que así amerite. De este modo, los hijos de los titulares originales pueden continuar los procedimientos legales necesarios y, finalmente poseer en calidad de dueños.

Por tanto, esta Asamblea Legislativa, en su facultad reconocida en el estado de Dereche vigente, ordena que se liberen las restricciones impuestas bajo el Programa de Fincas Tipo Familiar al predio de terreno antes mencionado, con el fin de atemperar la inscripción registral a la realidad física.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para la debida evaluación de la resolución conjunta de marras, la Comisión de Agricultura contó con el informe rendido por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

De dicho informe se desprende que, la Autoridad de Tierras es una corporación pública adscrita al Departamento de Agricultura, que fue creada al amparo de la Ley Núm. 26 de 1941 y tiene a su cargo la administración del Programa de Fincas de Tipo Familiar desde la aprobación del Plan de Reorganización Núm. 4 del 29 de julio de 2010.

La Autoridad de Tierras ha mantenido de manera consistente la posición de recomendar desfavorablemente las resoluciones conjuntas que buscan la liberación de restricciones y condiciones de uso agrícola impuestas bajo el Título VI de la Ley de Tierras. La Autoridad fundamenta dicha postura en que, según disponen la Ley Núm. 177 de 23 de octubre de 2014 y la Ley Núm. 113 de 29 de julio de 2024, su agencia se

encuentra impedida legalmente de aprobar segregaciones a segundos y/o terceros titulares en fincas que fueron obtenidas bajo el Título VI, dado que sus titulares aceptaron las condiciones y restricciones de forma libre y voluntaria. De hecho, dicha entidad asume sistemáticamente la misma posición en todos los casos que pretenden el mismo propósito de liberar restricciones sobre terrenos del Programa de Fincas de Tipo Familiar.

Ahora bien, la Asamblea Legislativa, como poder soberano en Puerto Rico, tiene la facultad constitucional de ordenar la liberación de condiciones y restricciones cuando el interés público así lo demande. Esta facultad está expresamente reconocida en la propia Sección 3 de la Ley Núm. 107 de 1974, que dispone que la Asamblea Legislativa podrá liberar las restricciones en aquellos casos que estime meritorios. Las restricciones impuestas bajo el Título VI respondieron a un contexto histórico y económico que, transcurridas más de cuatro décadas, ha cambiado sustancialmente. Mantener dichas restricciones no cumple ya el propósito para el cual fueron concebidas y, por el contrario, perpetúa una situación de injusticia para ciudadanos y sus herederos que ocupan y mantienen estos predios.

Resulta pertinente señalar que esta Asamblea Legislativa ha ejercido consistentemente esta facultad al aprobar múltiples resoluciones conjuntas de naturaleza similar en legislaturas anteriores, reconociendo que las condiciones originales del Programa de Fincas de Tipo Familiar ya no responden a la realidad social y económica de los titulares y sus herederos. La presente medida es cónsona con dicha trayectoria legislativa y con la necesidad de atemperar la realidad física de estos predios con su inscripción registral.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Del análisis realizado por esta Comisión, a tenor con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", no surge que la medida tenga impacto fiscal sobre las finanzas municipales.

CONCLUSIÓN

Analizada la resolución conjunta en sus méritos, entendemos que la misma requiere ser aprobada con prontitud. Entendemos que la aprobación de la R. C. de la C. 326 constituye un acto meritorio y de justicia para los titulares y sus herederos, quienes durante décadas han permanecido sujetos a restricciones que ya no cumplen el propósito para el cual fueron concebidas.

Valga destacar que, la Sección 3 de la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, comúnmente llamada "Ley de Preservación de Tierras para Uso Agrícola", claramente establece que ***"[L]a Junta de Planificación de Puerto Rico no aprobará proyecto alguno mediante el cual se intente desmembrar dichas unidades agrícolas o***

dedicarlas a un uso que no sea agrícola, excepto *para fines de uso público, o* ***cuando medie autorización expresa de la Asamblea Legislativa*** *(...)".* Así las cosas, entendemos procede se continúe con el trámite legislativo de la R. C. de la C. 326.

Para finalizar, es preciso indicar que la Sección 1 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico[1], delega a la Rama Legislativa la potestad de aprobar leyes. Por su parte, la Sección 17 del referido Artículo III[2], delinea el proceso legislativo a observarse para que una legislación presentada se convierta en ley. Asimismo, la Sección 19 del mismo Artículo[3], establece los requisitos constitucionales relativos a la aprobación de proyectos de ley, por los Cuerpos Legislativos y el Gobernador de Puerto Rico.

De conformidad con los preceptos constitucionales antes descritos, es imperativo reconocer que la aprobación de la R. C. de la C. 326 es un ejercicio válido de la facultad de esta Asamblea Legislativa, según es aquí fundamentado.

Sin lugar a dudas, es tarea de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico crear y aprobar política pública, la cual surge como respuesta a los cambios sociales que motivan la actualización del estado de derecho que rige el destino de todos los que aquí residimos. Por ello, podemos concluir que el propósito que origina la presentación de la medida ante nuestra consideración, es una acción cobijada dentro del amplio poder que tiene esta Rama, la cual fuera conferida por nuestros constituyentes.

Por todo lo anterior, la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 326, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

---

[1] Esta Sección, específicamente, dispone que "[e]l Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa, que se compondrá de dos Cámaras -el Senado y la Cámara de Representantes- cuyos miembros serán elegidos por votación directa en cada elección general."

[2] Esta Sección, específicamente, dispone que "[n]ingún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito; pero la cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo. Las cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de sesiones, en la forma que se determine por ley. No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley de presupuesto general sólo podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas. Ningún proyecto de ley será enmendado de manera que cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al mismo. Al enmendar cualquier artículo o sección de una ley, dicho artículo sección será promulgado en su totalidad tal como haya quedado enmendado. Todo proyecto de ley para obtener rentas se originará en la Cámara de Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o convenir en ellas como si se tratara de cualquier otro proyecto de ley."

[3] Esta Sección, específicamente, dispone que "[c]ualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se someterá al Gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro de diez días (exceptuando los domingos) contados a partir de la fecha en que lo hubiese recibido.

Cuando el Gobernador devuelva un proyecto, la cámara que lo reciba consignará las objeciones del Gobernador en el libro de actas y ambas cámaras podrán reconsiderar el proyecto, que de ser aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada una de ellas, se convertirá en ley.

Si la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el plazo de diez días de haberse sometido un proyecto al Gobernador, éste quedará relevado de la obligación de devolverlo con sus objeciones, y el proyecto sólo se convertirá en ley de firmarlo el Gobernador dentro de los treinta días de haberlo recibido.

Toda aprobación final o reconsideración de un proyecto será en votación por lista."

Respetuosamente sometido,

Hon. Jeison Rosa Ramos
Presidente
Comisión de Agricultura

(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(11 DE JUNIO DE 2026)

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea Legislativa

3ra. Sesión Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 326

25 DE MARZO DE 2026

Presentada por el representante *Roque Gracia (Por petición)*

Referida a la Comisión de Agricultura

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenar ~~al Departamento de Agricultura~~ *a la Autoridad de Tierras* y a la Junta de Planificación de Puerto Rico, a liberar de las restricciones y condiciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas, según dispuesto en la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, del predio de terreno marcado con el número Diez (10) en el Plano de Subdivisión de la finca "Vega Redonda", según consta en la Escritura Número Treinta y Tres (33), otorgada en San Juan, Puerto Rico, el 24 de junio de 1981 ante el Notario Público Rafael Pérez Fussa, sobre la Finca Número Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve (6,659) inscrita al Folio Número Doscientos Ochenta y Cuatro (284) Tomo Noventa y Tres (93) de Comerío, en el Registro de la Propiedad de Barranquitas, Inscripción Primera e inscrita a favor de Don Pedro Reyes Alicea y Doña Jesusa Ríos Ortiz, ambos fallecidos; *y para otros fines relacionados*.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, se creó para salvaguardar el destino y uso agrícola de las fincas del Programa de Fincas de Tipo Familiar, conocido como "Título VI de la Ley de Tierras". El Secretario de Agricultura fue facultado para la disposición de terrenos de uso agrícola mediante la cesión, venta, arrendamiento o

donaciones. La venta de estas fincas bajo el referido Programa se realizaba con una serie de condiciones y restricciones que formaban parte del acuerdo de compraventa.

El 24 de junio de 1981, le fue otorgada al matrimonio Reyes Ríos la titularidad del predio de terreno objeto de esta Resolución Conjunta bajo el Programa de Fincas Familiares, con las respectivas restricciones establecidas en la referida Ley Núm. 107. Las condiciones y restricciones se encuentran redactadas en la Escritura Número 33, otorgada en San Juan, Puerto Rico, el 24 de junio de 1981, ante el Notario Público Rafael Pérez Fussa, sobre la Finca Número Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve (6,659) inscrita al Folio Doscientos Ochenta y Cuatro (284) del Tomo Noventa y Tres (93) de Comerío, en el Registro de la Propiedad de Barranquitas, Inscripción Primera.

En su origen, la finalidad del Programa de Fincas de Tipo Familiar~~, establecido por la Ley Núm. 107, antes referida,~~ era promover la agricultura en pequeños predios. No obstante, a lo largo de más de cinco décadas de cambios sociales, económicos y demográficos en nuestra Isla, la realidad es que los hijos de aquellos primeros beneficiarios del Programa necesitaron un lugar donde vivir y desarrollarse en momentos de un gran auge poblacional. Por ello, fueron ampliando el entorno a través del establecimiento de comunidades en dichas tierras. Hoy en día, transcurrido el tiempo en que muchas de aquellas fincas dejaran de tener un fin prioritariamente agrícola, es necesario atemperar esa realidad en el Registro de la Propiedad, en los casos que así amerite. De este modo, los hijos de los titulares originales pueden continuar los procedimientos legales necesarios y, finalmente poseer en calidad de dueños.

Por tanto, esta Asamblea Legislativa, en su facultad reconocida en el estado de Dereche vigente, ordena que se liberen las restricciones impuestas bajo el Programa de Fincas Tipo Familiar al predio de terreno antes mencionado, con el fin de atemperar la inscripción registral a la realidad física.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena ~~al Departamento de Agricultura~~ *a la Autoridad de Tierras* y a la Junta de Planificación de Puerto Rico, a liberar de las restricciones y condiciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas, según dispuesto en la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, del predio de terreno marcado con el número Diez (10) en el Plano de Subdivisión de la finca "Vega Redonda", según consta en la Escritura Número 33, otorgada en San Juan, Puerto Rico, el 24 de junio de 1981, ante el Notario

Público Rafael Pérez Fussa, sobre la Finca Número Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve (6,659) inscrita al Folio Número Doscientos Ochenta y Cuatro (284) Tomo Noventa y Tres (93) de Comerío, en el Registro de la Propiedad de Barranquitas, Inscripción Primera e inscrita a favor de Don Pedro Reyes Alicea y Doña Jesusa Ríos Ortiz, ambos fallecidos.

Sección 2.-La Autoridad de Tierras de Puerto Rico procederá con la liberación de las condiciones y restricciones del predio de terreno identificado en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta en un término no mayor de ciento veinte (120) días a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta.

Sección 3.-La Junta de Planificación permitirá y autorizará la segregación de solares del terreno descrito en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, según lo autoriza la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada.

Sección ~~2~~ 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.